



INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2022

EQUIPO DE REDACCIÓN E INVESTIGACIÓN

Andrew Firmin, Inés M. Pousadela, Mandeep Tiwana

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

Kgalalelo Gaebee, Thapelo Masiwa, Lerato Pagiwa, Silvia Puerto Aboy, Matthew Reading Smith, Deborah Walter

PERSONAL DE CIVICUS

Cathryn Archibald, Amal Atrakouti, Josef Benedict, Clara Bosco, Jack Cornforth, Patricia Deniz, Basma Elmahdi, Josefina Folle, Tor Hodenfield, David Kode, Débora Leão, Lisa Majumdar, Tlholohelo Mojakisane, Paul Mulindwa, Aarti Narsee, Elisa Novoa, Carolina Vega Rivas, Hannah Wheatley, Susan Wilding

TRADUCCIÓN

Árabe: Alia Youssef Ibrahim

Español: María Cristina Romanó

Francés: Samia Diri

Portugués: Renato Barreto

DISEÑO

Juliana Pecollo

FOTO DE PORTADA: Protesta contra la invasión rusa de Ucrania en el área de Shibuya en Tokio, Japón, el 5 de marzo de 2022. Foto de Yuichi Yamazaki/Getty Images

FECHA DE PUBLICACIÓN: JUNIO DE 2022

ACERCA DE ESTE INFORME

Les damos la bienvenida al Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil 2022 de CIVICUS, la alianza mundial de la sociedad civil. El informe de este año, el decimoprimer de nuestra serie de publicación anual, tiene un formato nuevo, condensado y más accesible. En enero de 2022, CIVICUS lanzó **CIVICUS Lens**, una iniciativa de análisis permanente que cubre los principales acontecimientos de actualidad que involucran y afectan a la sociedad civil. Este informe se alimenta de y resume dicho análisis, el cual recoge las voces de actores de la sociedad civil de todo el mundo. Ofrece una instantánea del mundo de la sociedad civil tal como se encuentra a mediados de 2022: un mundo volátil, plagado de crisis, donde a pesar de que las fuerzas regresivas están movilizand una reacción feroz, la tenaz movilización de la sociedad civil sigue ganando batallas cruciales.

Panorama

8

Economía: demandas de justicia e igualdad

14

Democracia: volatilidad y regresión

24

Luchas contra la exclusión: avances y retrocesos

35

Medio ambiente: acción y negación

43

Gobernanza global: fallas al descubierto

49

Agradecimientos





PANORAMA

1 DEMANDAS DE CAMBIO RADICAL MOVILIZADAS POR AUMENTOS DE PRECIOS

El precio de casi todo está subiendo, en un país tras otro. El costo de los productos básicos, como los alimentos y el combustible, es el que más está subiendo, y la guerra de Rusia contra Ucrania está empeorando la situación, haciendo subir aún más los precios de los bienes básicos. Muchos gobiernos no están protegiendo a su población de las consecuencias. Mucha gente, ya agobiada por la pandemia, no logra llegar a fin de mes mientras ve cómo las empresas de combustibles fósiles se benefician del auge. La gente se indigna por la especulación y los precios abusivos. Cuando los costos de los productos básicos aumentan, suelen producirse protestas.

Cuando ocurren en contextos autoritarios y represivos donde otros medios de expresión del disenso están bloqueados, las protestas suelen ser generalizadas y masivas, y crecen rápidamente para abarcar una amplia variedad de demandas que van más allá de su desencadenante inicial: demandas que el sistema político es incapaz de satisfacer. La gente presiona no solamente porque quiere políticas económicas

distintas y nuevos líderes políticos, sino también por un cambio de sistema.

Esto es lo que ocurrió en **Sri Lanka** en marzo y abril de 2022, cuando el colapso económico provocado por una combinación de mala gestión y subida de precios paralizó la vida cotidiana y provocó protestas masivas que unieron a segmentos de la sociedad hasta entonces desconectados. La multitud reclamó una nueva forma de gobierno que restrinja el poder presidencial y lo someta a rendición de cuentas. En **Kazajistán**, en enero de 2022, una brusca subida de los precios de los combustibles dio lugar a demandas de reforma política y económica.

Las protestas de Kazajistán fueron recibidas con una violenta represión, con la cual colaboraron las fuerzas rusas decididas a aplastar toda demanda de democracia. La violencia es una respuesta habitual del Estado cuando la ciudadanía se moviliza en reclamo de una redistribución del poder. Pero la violencia estatal a veces no logra impedir que las protestas logren su cometido. Cabe esperar que en los próximos meses se produzcan nuevas protestas generalizadas provocadas por unas condiciones económicas insostenibles y el auge de la sindicalización en

reclamo de derechos laborales. En algunos casos, quienes exigen cambios saldrán victoriosos.

2 LA DEMOCRACIA BAJO ATAQUE Y LAS LUCHAS PARA SALVARLA

Los golpes de Estado militares han regresado. Los golpistas se aprovechan de que los aliados internacionales de sus países están mucho más preocupados por el control de la migración, la estabilidad, la seguridad y las oportunidades económicas que por los derechos humanos. Los ejércitos han tomado el control en **Burkina Faso, Guinea y Mali**, tendiendo a normalizar la realidad del gobierno no civil en África Occidental, así como en **Sudán**. Estos golpes suelen ir precedidos de un deterioro de la calidad de la democracia y de un descontento generalizado de la población por la incapacidad de sus dirigentes para abordar problemas acuciantes, lo que significa que hay quienes, al menos al comienzo, celebran los golpes.

La toma de poder por los militares no es la única forma de subvertir la democracia. En **Túnez**, el presidente electo está llevando a cabo un golpe de Estado por

etapas, habiendo destituido al parlamento, tomado el control del poder judicial y lanzado un proceso para reescribir la Constitución. La situación es similar en **El Salvador**, donde un presidente que cuenta con una supermayoría legislativa está eliminando los frenos y contrapesos y endureciendo las restricciones sobre la sociedad civil.

Adónde lleva esto es algo que se puede ver en **Nicaragua**, cuyo presidente, Daniel Ortega, ha coronado con el éxito su larga misión de vaciar completamente la democracia desde dentro, al punto de haber podido celebrar unas elecciones totalmente fraudulentas, facilitadas por la represión masiva. En **Turkmenistán**, por su parte, no cabía duda del resultado: el presidente saliente entregó el cargo a su hijo como si fuera una herencia familiar. A menudo se ofrece apenas la formalidad de la democracia, sin ninguna perspectiva de impugnación del poder.

China sigue siendo el mejor ejemplo global de un Estado bajo estricto control presidencial y libertades democráticas nulas. Es un modelo influyente que China promueve y que los autócratas de todo el mundo buscan replicar. China está imponiendo ahora este enfoque en **Hong Kong**, cuyo nuevo líder es el jefe de seguridad que reprimió brutalmente las protestas prodemocracia de 2019.

La marea tóxica del populismo de derecha tampoco ha terminado. Obtuvo el mayor número de votos de la historia en las elecciones presidenciales de **Francia** de abril de 2022, así como en las de **elecciones portuguesas**, normalizando el discurso político racista y xenófobo. En Estados Unidos, el trumpismo se ha convertido en la corriente ideológica dominante de la derecha. En Hungría, **Víctor Orbán** triunfó en abril de 2022 a pesar de sus estrechos vínculos con Vladimir Putin.

En las **Filipinas**, años de desinformación sistemática y de reescritura descarada de la historia allanaron el camino para que en mayo de 2022 se impusiera una alianza de dos dinastías autoritarias: el hijo del difunto dictador Ferdinando Marcos fue elegido presidente, y la hija del autoritario presidente saliente Rodrigo Duterte fue electa vicepresidenta.

En muchas otras campañas electorales más allá de Filipinas, la desinformación está transformando el discurso político. Está siendo intensamente difundida **dentro de Rusia**, impidiendo que gran parte de la ciudadanía vea la realidad de la guerra injustificada que está librando contra Ucrania. La desinformación también contribuyó a promover las protestas que paralizaron la capital de **Canadá** en febrero de 2022. Son muchas las fuerzas que difunden y se benefician de la desinformación: grupos de odio nacionales, redes internacionales antiderechos y Estados inescrupulosos. Pero todos ellos tienen los mismos objetivos: normalizar el extremismo, atacar los derechos y sembrar la división. El debate político razonado se vuelve cada vez más difícil en la medida en que segmentos de la ciudadanía se dejan convencer por falsedades flagrantes y teorías conspirativas.

Pero también se producen éxitos en la movilización de frentes comunes para expulsar a líderes políticos que fomentan la polarización y avivan el odio. Esto se vio en la República Checa en 2021 y en **Eslovenia** en 2022. Es posible que se produzcan más victorias de este tipo si las voces a favor de la democracia se unen, se organizan y ofrecen alternativas plausibles a quienes buscan ideas nuevas.

En muchos países, las elecciones se caracterizan por la volatilidad y la fragmentación política, ya que grandes segmentos de votantes piensan que

los políticos en el poder ya no tienen las respuestas y están dispuestos a optar por personalidades ajenas a la política, especialmente cuando prometen actuar contra la corrupción. Esto está impulsando algunos cambios que ofrecen esperanzas de avances en materia de derechos, en particular tras las recientes elecciones en **Australia**, Chile y **Honduras**. Pero el péndulo puede oscilar con la misma rapidez en el sentido contrario, y el rechazo contra los gobiernos de turno puede tener resultados tanto progresistas como regresivos.



AVANCES Y RETROCESOS EN LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN

Los grupos excluidos son los primeros en sufrir ataques contra sus derechos, provenientes entre otras fuentes de políticos que los consideran blancos fáciles y buscan enfrentar a diferentes grupos de población. Las personas migrantes y refugiadas son blancos frecuentes: el racismo que se esconde tras la habitual hostilidad con que son recibidos ha quedado al descubierto ante el **trato totalmente diferente** que los países occidentales han dispensado a los millones de personas que escapan de la guerra en Ucrania.

Actualmente se están produciendo ataques implacables contra el derecho al aborto, liderados por políticos de derecha que trabajan en conjunto con grupos antiderechos en Polonia y Estados Unidos, entre otros países. Pero a pesar de los desafíos se han producido algunos avances recientes, en particular en países latinoamericanos como **Colombia**, Ecuador, **El Salvador** y **México**, donde se han eliminado o suavizado las restricciones del derecho al aborto. Estos cambios suelen ser el resultado de

victorias judiciales tras años de acciones legales, combinadas con incidencia política y movilización masiva. A menudo los cambios no van demasiado lejos y los gobiernos se demoran en la implementación de las leyes y sentencias judiciales, pero todo ello abre nuevos espacios para la acción.

Al mismo tiempo, los avances producen reacciones negativas, movilizadas por poderosos grupos antiderechos a menudo ligados a fundaciones conservadoras estadounidenses con vínculos con grupos fundamentalistas religiosos. Esto se vio recientemente en **Guatemala**, donde hubo un intento de imponer penas de cárcel por aborto; la iniciativa fue retirada a causa de las fuertes críticas nacionales e internacionales que recibió.

Las masivas demostraciones de fuerza del movimiento global de mujeres, entre ellas las movilizaciones por el **Día Internacional de la Mujer**, son importantes puestas en escena de la resistencia a la represión y las aspiraciones de cambio. Sin embargo, las mujeres son frecuentemente instrumentalizadas en la lucha política. En **Afganistán**, las mujeres despojadas de derechos por el régimen talibán se sienten abandonadas por la comunidad internacional. En **India**, las mujeres musulmanas están en la mira de los nacionalistas hindúes, que las atacan tanto por su religión como por su género.

Los derechos de las personas LGBTQI+ son otra frontera clave de la lucha por el respeto y la dignidad. Los ataques contra ellos son a menudo liderados por políticos oportunistas que buscan sacar réditos políticos, como se ha visto en la reciente denigración pública de las personas LGBTQI+ en **Ghana** y **Hungría**. Sin embargo, la normalización de los derechos de las personas LGBTQI+ se está extendiendo por todo el

mundo. Un **Chile** en proceso de cambio, que actualmente está redactando una constitución basada en una perspectiva de derechos, reconoció el matrimonio igualitario, mientras que el pueblo de **Suiza** votó reconocerlo por abrumadora mayoría en un referéndum. Incluso en contextos hostiles como los de Honduras y Jamaica se han producido importantes avances, gracias a casos impulsados por la sociedad civil en el sistema regional de derechos humanos.

Los avances suelen llegar tras años de campañas de la sociedad civil que ponen en escena y demuestran en la práctica el valor de la diversidad. Una nueva generación, joven y diversa, está forjando movimientos sociales más allá de las estructuras convencionales para impulsar el cambio, exigiendo justicia racial, derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+, y derechos de los indígenas y de las personas migrantes y refugiadas como componente intrínseca de la lucha por las libertades democráticas, por economías más justas y por la justicia climática. Mayores cambios sobrevendrán en la medida en que se alimenten y empoderen movimientos nuevos y diversos.



JUSTICIA CLIMÁTICA: AHORA O NUNCA

La justicia climática está a la vanguardia de estas luchas porque un mundo que se calienta es un mundo intrínsecamente injusto, con desigualdades cada vez más profundas. La injusticia inherente al cambio climático se ha hecho visible en el impacto desproporcionado de fenómenos meteorológicos extremos que afectan tanto más a quienes menos tienen, tales como la ola de calor en **India**, las devastadoras inundaciones en **Sudáfrica** y los incendios forestales sin

precedentes en **Turquía**, entre muchos otros. Crisis como estas ponen de manifiesto la debilidad de la respuesta gubernamental, frente a la cual la sociedad civil hace todo lo que está a su alcance para ayudar a quienes lo necesitan.

El tiempo para actuar se está agotando. Los **últimos informes** del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) dejan claro que los gases de efecto invernadero deben reducirse drásticamente en los próximos años si queremos tener alguna esperanza de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C. Es la sociedad civil la que exige rapidez.

En el fondo, los resultados decepcionantes de la cumbre del clima **COP26** son una invitación a volver a ejercer presión callejera sobre los procesos institucionales. Es de esperar que el activismo, que incluye marchas masivas, huelgas climáticas y desobediencia civil no violenta, vuelva a crecer de cara a la COP27 en Egipto para instar a los gobiernos a comprometerse a realizar recortes de emisiones más ambiciosos. Pero un problema grave es que Egipto tiene espacio cívico cerrado, lo cual dificultará la movilización de la sociedad civil en torno a la cumbre. Sin la presión de la sociedad civil, no se producirá una acción climática lo suficientemente ambiciosa. Es por lo menos extraña la decisión de celebrar cumbres climáticas en países que restringen el espacio cívico.

La acción callejera, de importancia clave, seguirá complementándose con otras tácticas. El litigio climático va en aumento y ha producido algunos avances importantes en los tribunales, tales como la sentencia de 2021 en los **Países Bajos** que obligó a Shell a comprometerse a reducir sus emisiones. El activismo de los accionistas en las empresas de combustibles fósiles y sus financiadores se está intensificando,

y los fondos de pensiones reciben cada vez más presión para desinvertir de empresas de combustibles fósiles. En algunas elecciones recientes en países que son grandes emisores de gases de efecto invernadero pero que también han sufrido los impactos de eventos climáticos serios, como **Australia** y **Alemania**, más votantes están haciendo del clima una prioridad. La acción en todos los frentes está aumentando.

La guerra de Rusia contra Ucrania ha generado nueva conciencia de las relaciones de dependencia energética y de la impunidad de que gozan los Estados ricos en combustibles fósiles: la necesidad que tiene Europa del gas ruso está mitigando la presión internacional sobre Putin y ayudando a financiar su guerra. Nunca ha habido un momento más adecuado para atender a los llamados de la sociedad civil a acelerar la transición de combustibles fósiles a energías renovables, a financiar adecuadamente la resiliencia del sur global y a garantizar que los costos de la transición no recaigan sobre quienes menos tienen.

LA AGRESIÓN RUSA Y LAS INADECUACIONES DEL SISTEMA DE GOBERNANZA GLOBAL

La guerra de Rusia contra Ucrania es el más reciente de los acontecimientos que han puesto de manifiesto la in-

suficiencia de las instituciones internacionales que deberían garantizar la paz y defender los derechos humanos.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), trabado por el poder de veto que tiene Rusia en tanto que uno de sus cinco miembros permanentes, no ha podido hacer nada. La celebración de una rara **sesión extraordinaria** de la Asamblea General de la ONU no hizo más que poner de manifiesto el fracaso del Consejo de Seguridad. Aunque la resolución no vinculante de la Asamblea ofreció a muchos Estados la oportunidad de expresar su indignación, algunos se abstuvieron ostensiblemente de condenar las evidentes violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos cometidas por Rusia, dejando al descubierto un denso entramado de relaciones de influencia y patrocínio. Los Estados con espacio cívico restringido han demostrado ser mucho menos propensos a condenar la agresión rusa que los más democráticos.

También se ha observado una tendencia más general de muchos Estados a ignorar las normas internacionales -y no sólo para iniciar conflictos, sino también para ejercer una represión transnacional contra sus propios disidentes exiliados- y a tratar de influir sobre las instituciones internacionales mediante el financiamiento selectivo, la **captura** de altos cargos y el ejercicio de presiones indebidas para influenciar las decisiones de voto de otros Estados.

La sociedad civil hace todo lo que está a su alcance para trabajar en el marco de las instituciones internacionales, pero a menudo se le da escasa prioridad y se **le niega el acceso** a foros clave, mientras que el sector privado es un participante privilegiado, incluso cuando, como en el caso de las cumbres sobre el clima, las empresas son parte del problema.

La ineficacia de la cooperación internacional y la capacidad de los Estados poderosos para eludir las normas también han quedado expuestas por la pandemia de COVID-19. El desarrollo de un **tratado sobre pandemias** ofrece la esperanza de que se aprenda la lección antes de que se produzca la próxima pandemia; sin embargo, sólo será eficaz si da cabida a la sociedad civil tanto en su desarrollo como en su implementación.

La ONU se ha convertido en un organismo rígido y burocrático, de reacciones lentas, muy diferente de la organización proactiva que se pretendió que fuera. Y aunque a menudo dice lo correcto -su voz en temas como el cambio climático y la crisis alimentaria es importante-, no siempre es escuchada. La pandemia y la guerra de Rusia ponen de manifiesto la necesidad de una ONU eficaz como parte de un orden internacional basado en normas. Es hora de tomar en serio las propuestas de la sociedad civil para la reforma de la ONU.



ECONOMÍA: DEMANDAS DE JUSTICIA E IGUALDAD

Las protestas en reclamo de justicia económica han sacudido a países de todas las regiones, incluidos Estados autoritarios donde protestar conlleva importantes peligros. La gente protesta contra la pobreza, la desigualdad, el aumento de los precios, el desempleo, las políticas fiscales regresivas, las políticas económicas neoliberales y la corrupción masiva, recurriendo a la acción colectiva cuando los gobiernos no la escuchan y la política institucional no responde a sus necesidades. Muchos trabajadores continúan organizándose para reclamar los derechos laborales básicos que les niegan las empresas, a menudo respaldadas por sus gobiernos, y un reparto más justo de los beneficios empresariales.

LA GENTE SALE A LAS CALLES

A nivel mundial, el costo de vida está subiendo, y los precios de bienes básicos como los combustibles y los alimentos son los que más aumentan. Los precios de los alimentos llevan años subiendo, pero recientemente han experimentado subidas violentas, primero por la pandemia y ahora por la guerra de Rusia contra Ucrania. Se espera que más de **250 millones** de personas más se vean empujadas a la pobreza en 2022.

En todo el mundo, mucha gente vive con lo justo, al punto que incluso fluctuaciones pequeñas pueden colocarla ante la incertidumbre de no saber de dónde vendrá su próxima comida. Por ello, el aumento del costo de los bienes básicos es el principal predictor de la **protesta**.

Esto se vio en **Indonesia** en abril de 2022, cuando los estudiantes se lanzaron se movilizaron a causa del aumento del precio del aceite de cocina, directamente relacionado con la invasión rusa a Ucrania. Algo similar ocurrió en **España**, donde el aumento de los precios de los alimentos, la energía y los combustibles impulsó a miles de personas a salir a las calles a principios de 2022; ominosamente, como es usual el partido de extrema derecha Vox trató de capitalizar el descontento. En **Cuba**, las protestas fueron provocadas por la escasez de alimentos y medicamentos. En **Malawi**, por su parte, el desencadenante de las protestas de 2021 fue el aumento de las ya elevadas tarifas de telefonía y datos móviles.

Muchas protestas, sobre todo en 2021, también expresaron el enfado de la gente ante los efectos económicos de la pandemia y las medidas de confinamiento, a lo que a veces se agregó su descontento ante la gestión de la pandemia por parte de los

gobiernos y las altas tasas de contagio y fallecimientos. En **Túnez**, la gente ha protestado en repetidas ocasiones contra el elevado desempleo y los problemas económicos, agravados por la pandemia, que un presidente cada vez más autoritario no ha conseguido solucionar. En **Paraguay**, las protestas estallaron por la frustración frente a casos de corrupción en el sistema público de salud y la ineficacia de la respuesta gubernamental a la pandemia.

PROTESTAS ECONÓMICAS DESENCADENAN REIVINDICACIONES MÁS AMPLIAS

Muchas protestas que responden a desencadenantes aparentemente menores evolucionan rápidamente, y la gente enseguida comienza a reclamar la reversión de políticas regresivas tales como medidas de austeridad económica, así como acción para hacer frente a la alta inflación, la caída del nivel de vida y la profundización de la desigualdad. Las reivindicaciones económicas se combinan con demandas políticas: la gente denuncia que sus gobiernos y políticos no rinden cuentas, son corruptos y gobiernan en beneficio de los ricos, y exige cambios políticos de fondo.

En Sri Lanka las protestas comenzaron en marzo de 2022, cuando la mala gestión económica alcanzó un punto crítico. La ciudadanía expresó su hartazgo ante los cortes de electricidad, la escasez de alimentos y combustible y el aumento de la inflación, y pronto comenzó a exigir la dimisión del presidente y de los numerosos miembros de su familia que también ocupaban cargos en el gobierno. Además, los manifestantes exigieron un cambio constitucional para poner límites al poder ejecutivo, de modo que ningún presidente pueda tomar decisiones sin consultar ni rendir cuentas. Fue significativo que la gente se uniera en la protesta haciendo caso omiso de las divisiones étnicas y religiosas de las cuales tan a menudo los políticos se aprovechan.

Las protestas son en gran medida impulsadas por una ciudadanía enfadada, frustrada y decepcionada. Han sido desencadenadas por la crisis económica.

Los manifestantes exigen cambios legales e institucionales a largo plazo en el actual sistema de gobierno, empujando por la dimisión del presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, y otros miembros del clan Rajapaksa, la familia gobernante. Dirigidas en gran parte por jóvenes y estudiantes, estas protestas representan un despertar político de una escala sin precedentes.

[RUKI FERNANDO](#), activista de derechos humanos y escritor, Sri Lanka

También se produjeron movilizaciones masivas en Colombia, donde en abril de 2021 se desencadenó una ola de protestas en reacción a una propuesta de aumento de impuestos y eliminación de exenciones fiscales. Al igual que en Sri Lanka, los jóvenes estuvieron en las primeras líneas y sus protestas fueron acompañadas de importantes huelgas sindicales. Las reivindicaciones de los manifestantes pronto se ampliaron para abarcar cuestiones estructurales de

pobreza, desigualdad y violencia, agravadas por la inacción del gobierno a la hora de implementar los acuerdos de paz de 2016 y profundizadas por la pandemia. Las protestas recibieron una respuesta de una violencia brutal, que arrojó decenas de muertos y cientos de heridos y detenidos.

También fue brutal la respuesta del Estado a las protestas en Kazajistán. En enero de 2022, el precio del combustible se duplicó luego de la adopción de una política de libre mercado. La medida fue revertida a los pocos días, pero la gente siguió en las calles, exigiendo un cambio en relación con los numerosos problemas que dificultan su vida: la corrupción, el poder oligárquico, la desigualdad económica, la pobreza y la falta de democracia. El presidente destituyó a su gabinete, pero luego desató una política de represión brutal y detenciones masivas, asistido por fuerzas de seguridad rusas importadas para acabar con toda de-

manda de democracia al otro lado de la frontera de Rusia. Se reportaron más de cien personas muertas.

La inflación fue uno de los motores de las protestas que tuvieron lugar en el conflictivo Yemen, en **marzo de 2021**, provocadas por la falta de pago de los salarios del sector público, y nuevamente en **septiembre**, en respuesta a la caída del valor de la moneda. En **Irán** ocurrió algo similar a principios de 2022, cuando los empleados públicos, incluidos los maestros, protestaron por el aumento del costo de vida y el estancamiento de los salarios. Incluso en Omán se produjeron protestas en 2021, cuando los jóvenes **reclamaron** reformas económicas, el fin de la corrupción, puestos de trabajo y mejores condiciones de vida. También en **Ghana** la juventud tomó la iniciativa, movilizándose bajo el lema #FixTheCountry (“arreglen el país”) frente a los problemas económicos agravados por la mala gestión de gobierno y la corrupción.

En Argentina, la negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional provocó **protestas** en 2021 y 2022. La ciudadanía trató de resistirse a la imposición de políticas de austeridad económica que suelen conllevar recortes en los servicios públicos y un aumento de la presión fiscal sobre los sectores más vulnerables. En **El Salvador**, en cambio, fue una medida inusual la que provocó las protestas de septiembre de 2021: la movilización se desató frente a la sorpresiva decisión del presidente -véase más abajo- de adoptar al bitcoin como segunda moneda; la ciudadanía movilizada también expresó su preocupación por el aumento de la inflación, la mala gestión económica y el hiperpresidencialismo.

IMPACTOS Y CONCESIONES

En muchos casos, las protestas enfrentaron una represión violenta a medida que crecían y articulaban demandas de cambios de fondo. Incluso cuando tuvieron éxito, a menudo pagaron un precio muy alto.

El movimiento de protesta económica de mayor éxito en 2021 fue posiblemente también aquél frente al cual el Estado se cobró el precio más alto: **casi 700 personas** resultaron muertas en los campamentos de protesta de los **agricultores indios**. Extendidas a lo largo de todo un año, estas protestas se movilizaron contra nuevas leyes que acabaron con décadas de regulaciones que garantizaban a los agricultores un mercado y precios mínimos para sus productos, dejándoles en la incertidumbre. Acampados en las afueras de la capital india, Nueva Delhi, los agricultores recibieron una simpatía generaliza-

da. Por temor al castigo electoral, el primer ministro Narendra Modi acabó dando marcha atrás y revocó las leyes agrícolas en noviembre de 2021; lamentablemente, muchas vidas se perdieron por no haber actuado antes.

Otras protestas lograron algunos impactos, pero no produjeron avances importantes. En Colombia, la reforma impositiva fue **retirada** y sustituida por una propuesta más moderada. En Cuba, el gobierno **permitió** a los viajeros ingresar medicamentos, alimentos y productos de higiene sin limitaciones ni impuestos. En Malawi se introdujo un **plan de recuperación** económica en respuesta a las protestas. En Sri Lanka, las protestas han provocado hasta la fecha la dimisión del primer ministro y de su gabinete y han hecho perder su mayoría al partido gobernante.

En la mayoría de los casos, los cambios de fondo que los manifestantes reclaman aún están por llegar. En esos contextos cabe afirmar que la protesta permanecerá latente y probablemente resurja para volver a articular las demandas ante el próximo cimbronazo económico.

Es de esperar que las protestas continúen, toda vez que éstas no han surgido únicamente de los históricos epicentros de convocatorias, como las centrales obreras y sindicatos profesoraes, sino que hay múltiples epicentros de convocatorias en las ciudades y carreteras del país que logran movilizar ciudadaníaes diversas organizadas, en proceso de organizarse y no organizadas con diversas motivaciones o coyunturas particulares que las impulsan a salir a las calles.

[INTEGRANTES](#) de la [Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos](#) y de la [Campaña Defender la Libertad](#), Colombia

LUCHAS POR LOS DERECHOS LABORALES

La pandemia ha cambiado la relación de algunas personas con el trabajo y, en muchos casos, la gente se ha vuelto más directa a la hora de reclamar sus derechos laborales.

Muchos trabajadores -las multitudes cuyos empleos suponen peligro de contagio, los proveedores de servicios de primera línea y los trabajadores que reparten pedidos de empresas que operan en internet, que crecieron durante la cuarentena, se sintieron innecesariamente expuestos al riesgo, no reconocidos o infravalorados, y han tratado de mejorar su situación. Los trabajadores migrantes y quienes trabajan por jornal sufrieron especialmente durante el confinamiento y tuvieron pocas vías disponibles, aparte de la protesta. Los trabajadores de las empresas que más se beneficiaron con la pandemia -como Amazon- reclaman que los beneficios extraordinarios se repartan bajo la forma de mejores salarios y condiciones de trabajo. La gente exige que no se sacrifiquen las normas laborales existentes para implementar planes neoliberales de recuperación económica.

Los trabajadores de reparto de alimentos de **Taiwán** se cuentan entre quienes han buscado sindicalizarse en respuesta a la mayor presión sufrida durante la pandemia. En Honduras, los trabajadores de la salud, que desempeñaron un rol vital en la respuesta a la pandemia, **protestaron** en reclamo de puestos de trabajo luego de que miles quedaran sin empleo tras la expiración de sus contratos temporarios. Los manifestantes insistieron en que el gobierno les había prometido puestos de trabajo permanentes, pero luego se había retractado. Los trabajadores migrantes de Myanmar, instalados en una zona económica especial de Laos, **protestaron** después de que su empleador no les pa-

gara durante meses; la zona se cerró por la pandemia y, al parecer, los guardias impidieron salir a los trabajadores. En 2021 los trabajadores griegos realizaron repetidas huelgas en respuesta a cambios en la legislación laboral que permiten que los empresarios les exijan que trabajen más horas. A pesar de que miles de personas **bloquearon el tráfico** en Atenas, la ley fue aprobada.

Las huelgas de maestros se han convertido en algo habitual, ya que la inflación reduce aún más sus bajos salarios; sin embargo, los huelguistas suelen enfrentar restricciones y represalias. En febrero de 2022, los maestros de **Zimbabue** se declararon en huelga por reivindicaciones salariales y, según sus sindicatos, 135.000 de los aproximadamente 140.000 empleados en las escuelas públicas fueron sancionados con una suspensión de tres meses. En **Vanuatu**, una acción similar enfrentó restricciones: las autoridades

denegaron el permiso para una huelga de un mes convocada por el sindicato de maestros.

En Nigeria, los profesores universitarios iniciaron una larga huelga en reclamo de mejores salarios y mayor presupuesto para educación; los estudiantes los apoyaron mediante un movimiento que instó al gobierno a negociar para resolver el problema, evitar futuras huelgas y permitir a los estudiantes reanudar sus estudios.

Lo que quiere la Coalición por el Financiamiento de la Educación es que el gobierno nigeriano acceda a las demandas de los trabajadores del sector educativo. Dado que todos los trabajadores de la educación están en huelga, es lógico que los estudiantes se les unan.

[OLORUNFEMI ADEYEYE, Coalición por el Financiamiento de la Educación, Nigeria](#)

En mayo de 2021, Lesoto fue testigo de una **huelga nacional** de varias semanas de los trabajadores de las fábricas de ropa, calzado, cuero y textiles en reclamo de un aumento salarial del 20%, en consonancia con el aumento de los precios de los alimentos. El salario mínimo estaba congelado desde 2019, y aunque el Código Laboral lo obliga a actualizarlo periódicamente, al gobierno no lo había hecho, culpando por ello a la pandemia. Al mes siguiente, el gobierno aceptó aumentar el salario mínimo en un 14%, lo cual no satisfizo las demandas de los manifestantes. El gobierno también se cobró un precio innecesariamente alto: las fuerzas de seguridad reprimieron a los trabajadores en huelga y se reportaron dos muertos y varios heridos.

CAMPAÑAS VICTORIOSAS

Aunque las perspectivas de cambio sean limitadas, es posible conseguir avances. A principios de 2022 se

produjeron dos importantes victorias laborales en la India. En febrero, Shahi Exports, la mayor empresa de confección del país, **acordó** abonar unos cuatro millones de dólares estadounidenses en concepto de salarios impagos, equivalentes a nueve meses de salarios atrasados, a unos 80.000 trabajadores. El conflicto se había extendido por dos años frente a la negativa de la empresa a incorporar el aumento anual del costo de vida en el salario mínimo legal. La empresa, uno de los principales proveedores de grandes tiendas, también enfrentó una campaña internacional.

La presión internacional resultó decisiva para otro avance que se produjo en abril de 2022. Tras una campaña de la sociedad civil desencadenada por el asesinato de la trabajadora dalit Jeyasre Kathiravel a manos de su supervisor dentro de la fábrica en 2021, se negoció un **acuerdo histórico** para eliminar la violencia de género y el acoso en las fábricas de la empresa Eastman Exports. El Acuerdo de Dindigul fue suscripto por la empresa y el Sindicato Textil y del Trabajo de Tamil Nadu, la Alianza Asiática por el Salario Mínimo y Justicia Laboral Global - Foro Internacional por los Derechos Laborales, junto con H&M, la cadena a la que provee Eastman Exports. Al menos 5.000 trabajadores dalit, en su mayoría mujeres, se beneficiarán durante el primer año. Tras estos dos avances se intensificaron los esfuerzos para presionar a otras empresas a adoptar las mismas medidas.

El Acuerdo de Dindigul incluye un acuerdo de marca ejecutable (EBA), un tipo de acuerdo legalmente vinculante en el que las empresas multinacionales se comprometen a utilizar sus relaciones en la cadena de suministro para apoyar un programa liderado por los trabajadores o por los sindicatos en determinadas fábricas o lugares de trabajo. Este acuerdo es el primero de este tipo en la India, el único que cubre las hilanderías

y el primero que incluye protecciones explícitas contra la discriminación por motivos de casta, un problema que se intensificó durante la pandemia.

[JEEVA M, Alianza Asiática por el Salario Mínimo](#)

Años de campaña de la sociedad civil en favor de normas de trabajo decente dieron sus frutos en Uzbekistán en marzo de 2022, cuando la Organización Internacional del Trabajo concluyó que el país había **eliminado** el trabajo forzado y el trabajo infantil sistemático de su cosecha anual de algodón. Estas prácticas abusivas, coordinadas por el Estado, predominaron durante largo tiempo en este país, el séptimo productor de algodón del mundo, y afectaron a unos dos millones de adultos y medio millón de niños. Su eliminación fue el resultado de la Campaña del Algodón, una coalición de sociedad civil formada en 2007, que **organizó** un boicot al algodón uzbeko, al cual adhirieron muchas grandes



marcas y minoristas, e instó a las organizaciones internacionales a presionar al gobierno.

Seguimos convencidos de la importancia de centrar nuestras campañas en las demandas de los trabajadores afectados y de la sociedad civil, y de la necesidad de guiarnos por monitoreos y evaluaciones independientes. Y hemos aprendido que la incidencia en pos de los derechos laborales y los derechos humanos es una maratón, no una carrera de velocidad. Hay poder en la acción colectiva y en el compromiso de amplias coaliciones unidas en torno de un propósito común.

[ALLISON GILL, Justicia Laboral Global - Foro Internacional por los Derechos Laborales](#)

EL RESURGIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL

Estados Unidos es actualmente un hervidero de luchas por la sindicalización. Pocas empresas salieron tan bien paradas de la pandemia como Amazon, que vio elevarse vertiginosamente sus **beneficios** y el precio de sus acciones cuando mucha gente que no podía salir de sus casas comenzó a hacer sus pedidos por internet, convirtiendo a su fundador, Jeff Bezos, en una de las personas más ricas del mundo. Amazon también aumentó enormemente su planta, al punto de que ahora trabaja para ella **casi un millón de personas** solamente en Estados Unidos.

Tras experimentar los inconvenientes de continuar trabajando durante la pandemia, los trabajadores de Amazon empezaron a exigir una porción justa de los frutos del éxito de la empresa. En varias ciudades de Estados Unidos, los trabajadores de almacenes están intentando sindicalizarse para poder negociar colectivamente salarios y condiciones de trabajo. La

empresa responde recurriendo a un amplio conjunto de **tácticas antisindicales**, tales como el despliegue de equipos de respuesta rápida que incluyen a **ex militares** y la celebración de reuniones obligatorias y el uso de propaganda antisindical en los lugares de trabajo. Utilizó estas tácticas para ganar una votación contra el reconocimiento del sindicato en su depósito de Bessemer, Alabama, aunque el resultado fue posteriormente anulado y el resultado de una segunda votación todavía se está discutiendo. Sin embargo, en abril de 2022 se produjo un gran avance cuando los trabajadores de un almacén de Staten Island, en el estado de Nueva York, **votaron** a favor de afiliarse a un nuevo sindicato independiente, convirtiéndose en el primer depósito de Amazon sindicalizado en todos los Estados Unidos.

Los trabajadores de Amazon están dando el ejemplo. En abril de 2022, una tienda Apple de Atlanta, en el estado de Georgia, fue la **primera** de las 272 tiendas de la empresa en Estados Unidos en presentar una solicitud de votación para el reconocimiento de un sindicato. En diciembre de 2021, una sucursal de Starbucks en Buffalo, Nueva York, fue el primer establecimiento propiedad de la empresa en votar

a favor de la sindicalización. Desde entonces y hasta la fecha de redacción de este informe se han sumado **otras 16** sucursales; solo un establecimiento ha votado en contra de la sindicalización. En mayo de 2022, los trabajadores **lanzaron** una campaña de sindicalización en la cadena de supermercados Trader Joe's. A medida que aumenta el impulso, los trabajadores de distintos establecimientos aprenden y comparten lecciones clave sobre cómo organizarse, movilizando prácticas concretas de solidaridad.

Starbucks denomina "socios" a los miembros de su personal, pero, al igual que Amazon, se resiste a la sindicalización. También ha contratado a un bufete de abogados antisindical y ha celebrado reuniones antisindicales. En ambas empresas, numerosos empleados han denunciado que han sido despedidos o suspendidos, o que se les ha recortado la jornada laboral tras participar activamente en esfuerzos de sindicalización, a menudo con el pretexto de **pequeñas infracciones**. Estas acciones no concuerdan con la imagen que proyectan unas empresas que apuntan a una base de clientes liberales, las cuales suelen publicitarse sobre la base de sus supuestos valores. Sin embargo, las represalias no parecen haber logrado

otra cosa que reforzar la voluntad de los empleados de sindicalizarse, y el apoyo público a los sindicatos **ha crecido** a medida que la gente ha descubierto la realidad detrás de las etiquetas.



DEMOCRACIA: VOLATILIDAD Y REGRESIÓN

En muchos sitios los procesos e instituciones de la democracia siguen siendo objeto de ataques bajo la forma de golpes militares, la degradación de las instituciones democráticas por parte de líderes democráticamente elegidos y el aumento de la influencia de la extrema derecha. Todo ello presiona sobre las libertades cívicas. Al mismo tiempo aumentan la volatilidad y la fragmentación políticas. En algunos países, las elecciones presencian el ascenso de nuevas fuerzas políticas que consiguen derrotar a líderes autocráticos y divisivos, mientras que en muchos otros se observa el rechazo de los oficialismos, en la medida en que los votantes buscan nuevas alternativas en las cuales depositar sus esperanzas, especialmente cuando aparecen políticos que se posicionan como outsiders y prometen acabar con la corrupción. La volatilidad política puede crear oportunidades para la sociedad civil, pero también puede desencadenar crecientes amenazas.

EL REGRESO DE LOS GOLPES MILITARES

Los golpes militares no son cosa del pasado. Los ejércitos han tomado el control en Burkina Faso, Guinea y Mali, lo cual podría normalizar nuevamente el gobierno no civil en África Occidental. Los militares también se apoderaron del poder en Sudán tras la destitución de los miembros civiles del gobierno de transición, mientras que en Chad la muerte del presidente Idriss Déby en abril de 2021 fue aprovechada por el ejército para disolver el gobierno y colocar al hijo de Déby a la cabeza. Los golpistas se están aprovechando de que a los aliados internacionales de sus países les preocupan más el control migratorio, la estabilidad, la seguridad y las oportunidades económicas que los derechos humanos.

Los acontecimientos dieron un giro brusco en Burkina Faso y Sudán, que en algún momento desbordaron con la promesa revolucionaria de democracia. Se trata de países cuya población ha tenido la experiencia reciente de derrocar a líderes antidemocráticos de larga data y resistir los esfuerzos militares iniciales de cooptar las revoluciones.

Los golpes suelen ir precedidos de un descontento generalizado de la ciudadanía ante la incapacidad de sus líderes electos para resolver problemas

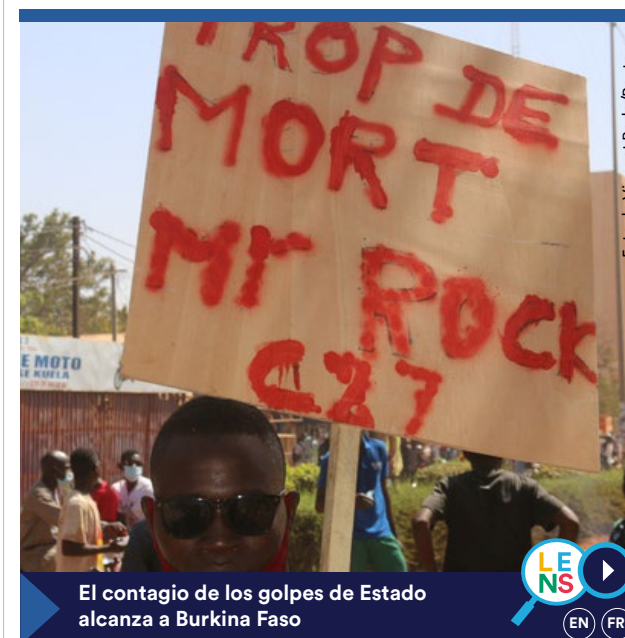


Foto de Vincent Bado/Reuters

El contagio de los golpes de Estado alcanza a Burkina Faso



acuciantes como la pobreza, la corrupción y la inseguridad, a los que en Burkina Faso y Mali se suma la insurrección yihadista. Por ese motivo, los golpes de Estado suelen contar con cierto apoyo popular, y hay quienes los celebran en las calles.

Los golpes de Estado de África Occidental se han producido en contextos de deterioro general de la calidad de la democracia, a menudo caracterizados por la celebración de elecciones defectuosas y retoques a la constitución para eliminar los límites de los mandatos presidenciales, como ocurrió **antes** del golpe de Guinea. Estas medidas suelen recibir poco escrutinio y condena internacionales, en comparación con los propios golpes de Estado. La reacción internacional sólo llega cuando ya es demasiado tarde.



El papel de las instituciones internacionales ha sido de control más que de prevención de daños. La Misión Integrada de Asistencia para la Transición en Sudán, de la ONU, se desplegó en 2020, pero durante los meses previos al golpe y frente a la escalada de tensiones y diferencias entre los partidos que lideraban la transición, permaneció totalmente ausente. Su papel de mediación sólo se materializó en una fase posterior, cuando el golpe ya estaba en marcha. Las instituciones regionales, como la Unión Africana y la Liga Árabe, han desempeñado un rol marginal.

[ABDEL-RAHMAN EL MAHDI](#), [Iniciativa para el Desarrollo de Sudán](#)

Esta tendencia regresiva supone una gran prueba para las organizaciones internacionales que deben mantener los estándares democráticos, incluida la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. El desafío surge del hecho de que se ha ofrecido



a la gente una versión disminuida y procedimental de la democracia, caracterizada por el ritual vacío de unas elecciones periódicas de calidad cuestionable, como resultado de lo cual la idea misma de la democracia resulta devaluada.

Los gobernantes militares suelen prometer soluciones rápidas: destituyen a líderes corruptos y prometen hacer una limpieza a fondo y devolver enseguida el poder a los civiles. Pero a menudo estas promesas no van acompañadas de un calendario, y el gobierno militar se consolida. En Mali, la junta militar primero prometió celebrar elecciones en 2022, pero luego **aplazó** hasta 2025. Los presidentes militares tienen la costumbre de disfrutar del poder y es habitual que se pongan trajes de civil y traten de aferrarse al cargo mediante la celebración de elecciones plagadas de irregularidades.



El grado de apoyo público a los golpes de Estado varía. En Sudán, donde la experiencia de la revolución es más reciente, la gente ha **seguido protestando** masivamente para exigir la restauración de la democracia, desafiando la brutal represión.

LA DEMOCRACIA SOCAVADA DESDE DENTRO

La toma del poder por parte de los militares no es la única forma de subvertir la democracia. En Túnez, el presidente Kais Saied está llevando a cabo un golpe de Estado por etapas, tras destituir al parlamento, tomar el control del poder judicial y de la comisión electoral e iniciar un proceso de **reforma constitucional** del que ha excluido a la oposición. Debido a que arrasó con una política de partidos disfuncional y a que el retroceso ha sido gradual, inicialmente hubo mucha



reticencia a calificarlo de golpe. Pero el presidente tiene ahora un poder que no conoce límites mientras que varios opositores languidecen **en la cárcel**: el rótulo encaja.

El espacio cívico se está reduciendo. Aunque la sociedad civil aún no está siendo directamente amenazada, creemos que nos está llegando el turno. Nos hemos dado cuenta de que los tomadores de decisiones tunecinos odian a los cuerpos intermedios, por lo que han cerrado el parlamento, atacado al poder judicial y boicoteado a los medios de comunicación. Probablemente seamos los próximos en la lista, así que tenemos que estar muy atentos.

[AMINE GHALI](#), [Centro para la Transición Democrática](#)
[Al Kawakibi](#), Túnez

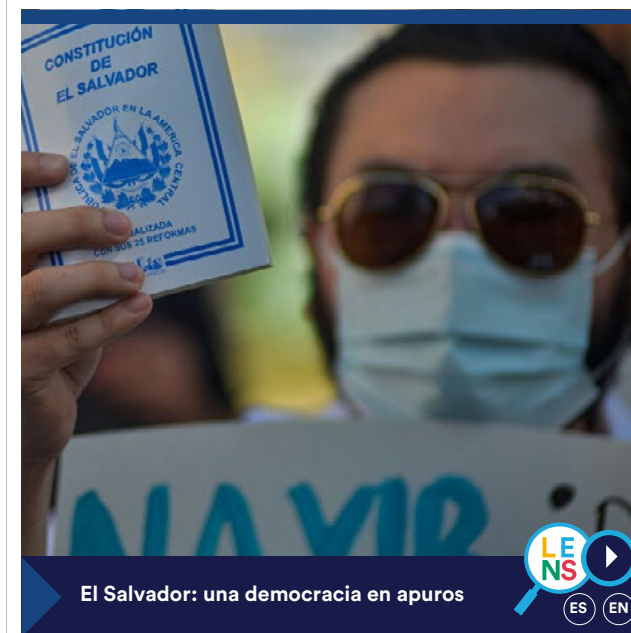
En El Salvador, el presidente populista Nayib Bukele ha estado muy ocupado eliminando los frenos y contrapesos a su poder desde que su partido advenedizo obtuvo una supermayoría en las elecciones legislativas de 2021. Ha **reinterpretado** la Constitución en su propio beneficio, ha ocupado los tribunales con sus partidarios, ha endurecido las restricciones a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes y, a pesar de presentarse como paladín de la lucha contra la corrupción, ha **desmantelado** un organismo de control anticorrupción clave. Todo ello con el apoyo de la ciudadanía; lo que lo puso en apuros fue su **extraña decisión** de introducir el bitcoin como moneda paralela en junio de 2021 (véase más arriba), lo cual puso de manifiesto una vez más que los frenos y contrapesos son una excelente idea.

A partir de las elecciones legislativas, que Bukele ganó por amplia mayoría, la seguridad jurídica dejó de existir. En cuanto se conformó, a principios de mayo, la nueva Asamblea legislativa destituyó a los jueces de la Sala Constitucional y al titular de la fiscalía general.

Habíamos llegado a confiar en que la Sala Constitucional nos protegería de las arbitrariedades, pero esa certeza se desvaneció en un instante. Poco después, la nueva Sala Constitucional habilitó la reelección presidencial inmediata para un segundo mandato, hasta entonces prohibida por la Constitución de El Salvador.

[EDUARDO ESCOBAR](#), [Acción Ciudadana](#), El Salvador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ejemplificó el modo en que líderes democráticamente electos intentan manipular los mecanismos de la democracia para sus propios fines: en abril de 2022 celebró un extraño referéndum revocatorio contra sí mismo, cosa que nadie había pedido, en un intento de aumentar su legitimidad. Su objetivo pareció ser el de posicionarse como la voz del pueblo y reforzar sus **ataques** contra la sociedad civil y los medios de comunicación. Sin embargo, la artimaña le salió mal: reunió una gran cantidad de votos de sus partidarios,



pero con una participación extremadamente baja, ya que la mayoría se mantuvo al margen para no legitimizar su maniobra.

El partido oficialista y el presidente capturaron y utilizaron una herramienta que se supone debe ser activada por la ciudadanía insatisfecha con la labor del jefe del Ejecutivo. Fue el oficialismo el que promovió la revocación del mandato del presidente. Atizaron la confrontación con el Instituto Nacional Electoral para cuestionar su autonomía. Le restaron presupuesto para la instalación de urnas e incumplieron la ley haciendo propaganda prohibida desde el gobierno. Profundizaron la polarización y la estigmatización de quienes consideraron públicamente al ejercicio como una farsa.

LEOPOLDO MALDONADO, [Artículo 19](#)

Para ver adónde pueden conducir estos procesos, no hay más que mirar en dirección del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que finalmente ha tenido éxito en su larga misión de vaciar completamente la democracia desde dentro. En noviembre de 2021, gracias a la **represión sistemática**, celebró unas elecciones totalmente fraudulentas para obtener el sello de aprobación para un nuevo mandato presidencial. Cualquiera que estuviera en condiciones de hacerle frente, desde la sociedad civil hasta sus antiguos aliados políticos, ha sido encarcelado bajo acusaciones falsas o se ha visto obligado a exiliarse para escapar de la cárcel.

No solamente el pueblo no reconoce los resultados de estas elecciones: hay más de 40 países que no han reconocido. El gobierno llevó a cabo unas elecciones frau-

ulentas para ganar legitimidad, pero no lo consiguió porque nadie lo reconoce ni a nivel nacional ni a nivel internacional.

[DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS NICARAGÜENSE ANÓNIMA](#)

En Turkmenistán las elecciones están tan vaciadas de sentido que dieron al presidente la seguridad de que podría ceder el cargo a su hijo sin apenas una mínima perturbación, para luego seguir ejerciendo el poder detrás del trono. En Yibuti, el presidente Ismaïl Omar Guelleh se aseguró un largo gobierno ya que **obtuvo** un quinto mandato tras enfrentarse a un candidato opositor simbólico. En Bielorrusia, el presidente dictatorial Alexander Lukashenko se aferró al poder mediante una campaña de encarcelamiento masivo cuando se produjeron grandes protestas en reacción a su reelección de 2020, descaradamente fraudulen-



México: artimaña plebiscitaria no deja a nadie contento



Nicaragua: el rey está desnudo y todo el mundo lo sabe



Turkmenistán: tiranía muda en dinastía



ta y apoyada financieramente por Rusia. En febrero de 2022, un referéndum constitucional carente de toda sustancia democrática amplió los poderes de Lukashenko y convenientemente anuló la neutralidad militar de Bielorrusia pocos días después del inicio de la invasión rusa a Ucrania.

Durante largo tiempo China ha sido tristemente célebre por su nula tolerancia hacia el ejercicio de las libertades democráticas. Este enfoque se ha extendido a Hong Kong desde que en 2019 las **protestas pro-democracia** se atrevieron a desafiar al poder chino. Los líderes del movimiento democrático están ahora en la cárcel o en el exilio, y el gobierno chino está volviendo a Hong Kong indistinguible de la China continental, descartando unilateralmente las garantías otorgadas en 1997, cuando acabó el dominio británico. En abril de 2022, mediante una maniobra que de elección tuvo

apenas el nombre, el único candidato a jefe del gobierno recibió el respaldo de un puñado de electores fieles seleccionados a dedo. El hecho de que el predecible ganador, John Lee, fuera el jefe de seguridad que aplastó brutalmente las protestas por la democracia puso en evidencia las prioridades de China.

En China apenas parecía que fuese posible introducir mayores restricciones, pero el autoritario presidente Xi Jinping ha lanzado una nueva ofensiva en vistas del Congreso Nacional del Partido Comunista que se celebrará en noviembre de 2022 y confirmará su tercer período en el cargo. Ahora también la actividad no política en internet y muchos elementos de la cultura popular están bajo ataque, ya que Xi busca eliminar toda

competencia por la lealtad inquebrantable que él y el partido exigen. Estas tendencias son preocupantes a nivel mundial, dada la amplia influencia internacional de China, que fomenta la imitación de sus prácticas.

PERSISTENCIA DEL POPULISMO DE DERECHA

La marea tóxica del populismo de derecha tampoco ha terminado. La extrema derecha obtuvo el **mayor número de votos de su historia** en las elecciones presidenciales de Francia de abril de 2022, donde se puso de manifiesto su poder para ganar incluso cuando pierde, ya que impulsó a los candidatos del centro político a **adoptar** una retórica de línea dura contra los inmigrantes. Las elecciones de enero de 2022 en Portugal, un país que durante mucho tiempo fue considerado inmune a los llamamientos de la extrema derecha, tam-



bién fue testigo de la normalización de la presencia de la extrema derecha en la política electoral.

El autoritario líder húngaro Viktor Orbán, **figura antiderechos** de dimensiones globales, triunfó en abril de 2022 pese a enfrentar a una oposición unida en su contra cuya campaña enfatizó sus estrechos vínculos con Putin.

En Filipinas, toda esperanza de restablecer los derechos se desvaneció en las elecciones de mayo de 2022. El autoritario presidente Rodrigo Duterte, cuya “guerra contra las drogas” se ha cobrado decenas de miles de vidas, le entregará el mando al hijo y tucayo de Ferdinando Marcos, el dictador sangriento y corrupto que fuera derrocado por un levantamiento popular pacífico en 1986. Lo acompañará en la vicepresidencia la hija de Duterte. Aunque la competencia estuvo lejos de ser justa y la compra de votos tuvo

peso, la rotunda victoria de la alianza autocrática también fue posible gracias a una agresiva operación de desinformación desplegada a lo largo de los años para reescribir la historia: un importante segmento de votantes considera ahora los años de la brutal dictadura como una época de prosperidad y seguridad que les gustaría revivir.

Me temo que dentro de unos meses o años viviremos bajo una dictadura. Es posible que Marcos pueda permanecer en el poder todo el tiempo que quiera. Después de intentar alcanzar el poder durante tanto tiempo, finalmente ha ganado, y no dejará el poder fácilmente. Da mucho miedo porque las violaciones de los derechos humanos que se produjeron durante la dictadura de su padre aún no se han resuelto. Es probable que se produzcan más violaciones de los derechos humanos.

[MARINEL UBALDO, Vivir Laudato Si' Filipinas](#)

El poder de los llamamientos de la extrema derecha para movilizar a la gente con desinformación se observó en la capital de Canadá, Ottawa, en febrero de 2022, donde un bloqueo de camioneros paralizó la vida normal. La protesta se produjo en respuesta al requisito de vacunación contra el COVID-19 propuesto para los camioneros que cruzan la frontera, pero rápidamente dio curso a una serie de teorías conspirativas de extrema derecha y a un sentimiento antigubernamental extremo. Fue apenas un ejemplo de la forma en que la desinformación es utilizada deliberadamente como arma para engañar a la gente, deformar su comprensión de la realidad y fomentar la división. Grupos extremistas nacionales, grupos antiderechos conectados a nivel global y Estados inescrupulosos como China y Rusia compiten en la industria de la desinformación.

Las protestas de Canadá también ofrecieron nueva evidencia del oportunismo de la extrema derecha,



que se ha apoderado del tema de la vacunación como caballito de batalla, y de las corrientes internacionales de apoyo de que goza gracias a los **recursos** provistos por la extrema derecha estadounidense. En una movida peligrosa, en reacción a una nueva derrota en las elecciones canadienses de septiembre de 2021 el partido de centroderecha **se hizo eco** y legitimó la retórica de la extrema derecha.

Los llamamientos antiderechos también se desplegaron y normalizaron en el muy diferente contexto de Corea del Sur, cuyas elecciones presidenciales de marzo de 2022 presenciaron una contienda regresiva en relación con los derechos de las mujeres. Haciendo caso omiso de la realidad persistente de la **exclusión** de las mujeres, el ganador Yoon Suk-yeol **dirigió** su campaña electoral a los jóvenes descontentos, confiando legitimidad a los mitos, antes marginales, que adjudican a los pequeños avances realizados en materia de igualdad de género la responsabilidad por las dificultades que experimentan los hombres jóvenes en el mercado laboral.

Pero los esfuerzos por movilizar frentes de oposición de base amplia para expulsar a líderes populistas de derecha obtuvieron algunos éxitos, por ejemplo en la República Checa en 2021 y en Eslovenia en abril de 2022. En la República Checa, dos coaliciones de oposición dejaron de lado sus diferencias para derrotar al primer ministro populista Andrej Babiš y luego se **unieron** para formar un gobierno de unidad moderado. En Eslovenia, un nuevo partido ofreció una alternativa para derrotar a un líder similar, Janez Janša, conocido por sus **ataques** contra la sociedad civil. Ambos casos indican que, dado que estos líderes se benefician con la división, las propuestas que unen a la gente y ofrecen alternativas nuevas y atractivas pueden derrotarlos.



La narrativa principal utilizada por los miembros de la coalición democrática expresaba que necesitábamos un cambio, que ya estábamos hartos de tener un oligarca como primer ministro, y que queríamos que dejaran de fluir ilegalmente miles de millones hacia los negocios de los políticos.

MARIE JAHODOVÁ, [Un millón de momentos para la democracia](#), República Checa

CAMBIO POLÍTICO Y VOLATILIDAD

También se produjeron cambios en Bulgaria y Moldavia, donde líderes del establishment asociados a la corrupción en gran escala fueron derrotados; en Bulgaria,



Bulgaria: nuevo gobierno, nuevas esperanzas



Moldavia: hora de romper con un pasado corrupto



ria, como en Eslovenia, triunfó un nuevo partido que los votantes consideraron que ofrecía una alternativa novedosa. Tanto en Bulgaria como en la República Checa, el cambio político fue precedido por protestas masivas mediante las cuales la ciudadanía expresó su indignación ante la corrupción y la degradación del Estado de Derecho.

El cambio está a punto de producirse en Chile, donde las protestas condujeron a un **proceso constituyente** liderado por una convención elegida popularmente y caracterizada por una diversidad sin precedentes. En diciembre de 2021, el antiguo líder estudiantil Gabriel Boric fue elegido el presidente más joven de la historia del país. Boric se comprometió a construir una economía más justa y a promover valores igualitarios, ambientales y feministas, presentando a los votantes una disyuntiva muy clara entre su visión y la plataforma neoliberal y excluyente de su oponente.

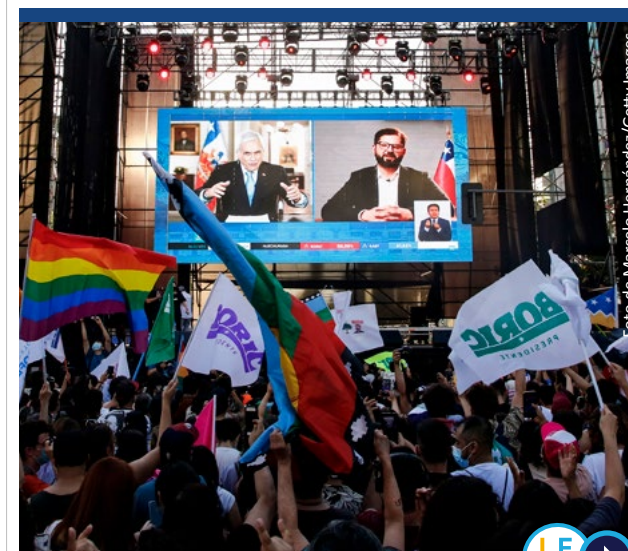


La democracia de Zambia supera una prueba crucial

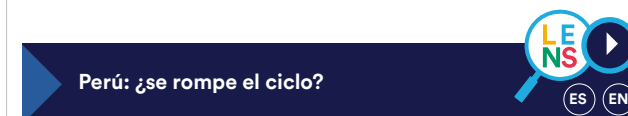


En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de junio de 2021, los votantes peruanos tuvieron que elegir entre dos visiones opuestas. El izquierdista Pedro Castillo venció a la derechista Keiko Fujimori por un delgado margen de apenas **44.000 votos**. Fujimori desplegó entonces el manual de estrategias de Trump, denunciando falsamente fraude electoral. El derrotado presidente de Zambia, Edgar Lungu, intentó lo mismo en un contexto en que los votantes optaron abrumadoramente por el cambio, a pesar de los múltiples **intentos** del presidente en ejercicio de distorsionar el resultado.

El electorado hondureño también optó por el cambio, convirtiendo a la izquierdista Xiomara Castro en



Chile en la encrucijada entre el pasado y el futuro



Perú: ¿se rompe el ciclo?



su primera presidente mujer, un resultado que en parte se debió a la extraordinaria corrupción que hizo que su predecesor, Juan Orlando Hernández, **fuera extraditado** a Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y posesión de armas. Al otro lado del mundo, Samoa también eligió por primera vez a una mujer, Naomi Mata'afa, como primera ministra. Ello supuso la primera derrota electoral del partido que gobernaba desde 1982 y un desafío potencialmente importante a las normas patriarcales que en las naciones insulares del Pacífico suelen excluir a las mujeres de la política.

En las elecciones australianas de mayo de 2022, varios independientes consiguieron derrotar a políticos establecidos, lo cual constituyó un factor clave en la sorpresiva derrota del partido gobernante. Además de estar comprometidos con la acción climática -véase más abajo-, muchos de los nuevos independientes

son mujeres que ofrecen una alternativa a la política machista imperante en el país y a la naturaleza tóxica del discurso político dominante.

Incluso la gobernanza irremediamente estancada del Líbano, donde la distribución del poder entre grupos sectarios ha fomentado durante mucho tiempo una extraordinaria corrupción y ha perpetuado gobiernos que no tuvieron interés en abordar los problemas políticos y económicos, fue desafiada en las elecciones de mayo de 2022. Fueron elegidos varios jóvenes líderes del movimiento de protesta activo **desde 2019**, quienes derrotaron a candidatos del establishment. Los nuevos miembros jóvenes del parlamento están trabajando por encima de las barreras sectarias e incorporando demandas de derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+ en sus programas de cambio político y económico.

« A pesar de desarrollarse en un contexto político y económico extremadamente complicado, incierto y turbulento, el proceso dio lugar a la elección de un gran número de nuevos candidatos independientes procedentes de la sociedad civil y que reclaman un cambio. Estas nuevas voces tienen agendas políticas muy diferentes a las de los partidos tradicionales en el poder: reclaman un nuevo sistema de gobernanza más responsable y los derechos de las mujeres, entre otras cuestiones. Estas agendas incluyen hojas de ruta para superar la profunda crisis económica actual. Y, lo que es más importante, se centran en cómo detener la contienda regresiva que se está produciendo en el Líbano.

[LINA ABOU HABIB](#), Instituto Asfari para la Sociedad Civil y la Ciudadanía, Líbano

En muchos de estos casos, cuando han tenido la oportunidad la ciudadanía ha abandonado a los partidos tradicionales y se ha inclinado por opciones nuevas. La



Honduras: ¿un ciclo que termina?



Una primicia femenina para Samoa



Cambio en Australia



volatilidad de las preferencias de voto está produciendo cuerpos legislativos muy fragmentados y dando la victoria a candidatos presidenciales que llegan a la segunda vuelta con un escaso porcentaje de votos.

En 2021, alrededor del 70% de los miembros de la Asamblea Nacional de Ecuador que se presentaron a la reelección **perdieron** sus escaños, y la fragmentación de los partidos de izquierda permitió que el líder empresarial de derecha Guillermo Lasso ganara la presidencia en segunda vuelta. Pero los escándalos de corrupción y sus políticas económicas neoliberales hicieron que su popularidad fuera efímera, y **las protestas** que han estallado desde entonces su-

gieren que la volatilidad persistirá.

En las elecciones presidenciales de Costa Rica de febrero de 2022, fueron mucho más numerosos quienes no votaron en la primera vuelta que quienes apoyaron a alguno de los candidatos. En un terreno increíblemente concurrido, el eventual ganador, Rodrigo Chaves, se aseguró el apoyo de apenas 16,8% de los votantes. Sus propuestas diferían poco de las de su oponente en la segunda vuelta, pero su **posicionamiento** como recién llegado dispuesto a atacar la corrupción del establishment caló en una ciudadanía que parecía buscar algo nuevo.

Los ganadores de muchas elecciones recientes deberían ser conscientes de que su victoria puede tener menos que ver con su atractivo que con el rechazo a los gobiernos de turno. Al convertirse en gobierno, deberían saber que los votantes los juzgarán de la misma manera. Deben trabajar en interés no solamente de sus votantes, sino de la sociedad en su conjunto, y cumplir las promesas de lucha contra la corrupción y de rendición de cuentas hechas en la campaña. Nadie cuenta con mandato para monopolizar el poder, y los ganadores de las elecciones tienen el deber de respetar y defender las instituciones y los procesos democráticos y habilitar el espacio cívico para que la sociedad civil pueda desempeñar el rol que le corresponde.





LUCHAS CONTRA LA EXCLUSIÓN: AVANCES Y RETROCESOS

Los grupos excluidos que suelen ser objeto de ataques políticos –y sobre todo las mujeres, las personas LGBTQI+, las personas indígenas y las migrantes y refugiadas- están resistiendo. Con enormes esfuerzos, están obteniendo victorias frente a los movimientos de supremacía blanca, xenófobos, misóginos y homófobos, y frente a los oportunistas políticos que se asocian a ellos para promover programas regresivos y excluyentes.

Su resistencia a la regresión y sus avances son el resultado de años de tenaces campañas de la sociedad civil. Ésta se ha convertido en el espacio por excelencia del respeto de la diversidad y la práctica de la interseccionalidad, entre otras cosas porque al frente de sus luchas hay una nueva generación que está forjando nuevas formas organizativas e integrando instintivamente la eliminación de la discriminación en su lucha por las libertades democráticas y la justicia económica, ambiental y social.

EL MOVIMIENTO DE MUJERES EN EL ESPACIO PÚBLICO

Allí donde se relajaron las restricciones pandémicas, los movimientos de mujeres salieron con fuerza en el Día Internacional de la Mujer de 2022 para mantener las demandas de igualdad y justicia de género en la agenda pública. Las marchas de mujeres exigieron derechos sexuales y reproductivos, derechos sociales y económicos, y mayor representación política para contribuir a impulsar el progreso en todos los frentes. Reclamaron acción contra la violencia de género, que se había intensificado durante la pandemia, dejando al descubierto modelos de subordinación y opresión muy arraigados que, si no son cuestionados, perdurarán más allá de la pandemia.

■ ■ **Todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas se intensificaron durante la pandemia. Desgraciadamente, las épocas de crisis rara vez han resultado ser un catalizador de la igualdad de género. La clave para lograr la igualdad y la justicia social es una sociedad civil activa.**

[HANNAH STEINER y SOPHIE HANSAL, Red de Centros de Apoyo para Mujeres y Niñas de Austria](#)

La violencia de género y la misoginia institucionalizada quedaron en evidencia en el Reino Unido en marzo de 2021, cuando el asesinato de la joven Sarah Everard a manos de un agente de policía en actividad

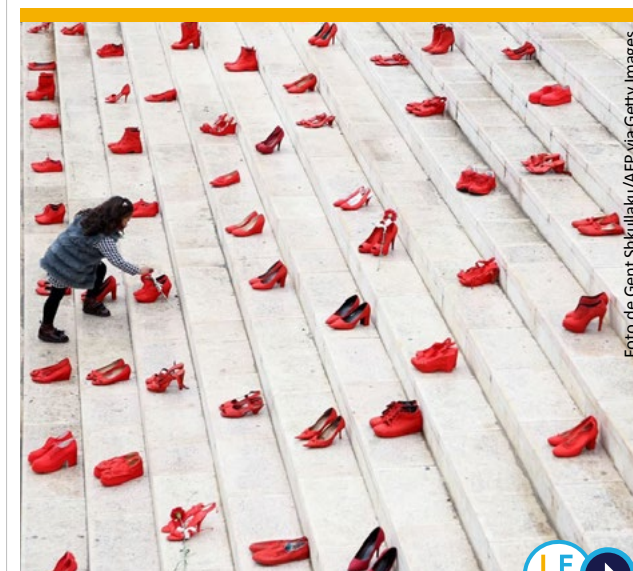


Foto de Gent Shkullaki/AFP via Getty Images

La sororidad vuelve a las calles



provocó una oleada nacional de indignación frente a la violencia contra las mujeres y la falta de protección por parte de la policía. En una vigilia que organizaron para expresar su dolor, las mujeres presentes fueron maltratadas por agentes de policía. Al salir a la luz nuevas revelaciones de misoginia y racismo sistémicos en la policía, la presión obligó a la jefa de la policía de Londres a dimitir.

La misoginia no es un problema solamente de la policía; es un problema social. Los misóginos son el producto de una sociedad que ve a las mujeres y a las niñas como inferiores. Para que las mujeres sean respetadas y tratadas como iguales, la reforma policial es necesaria, pero no es suficiente. Lo que necesitamos es cambiar la cultura que envía a las niñas a tomar clases de defensa personal en lugar de enseñar a los niños a respetar a las mujeres.

ANNA BIRLEY, [Reclaim These Streets](#), Reino Unido



Indonesia mostró al mundo que el cambio es posible: más de una década de esfuerzos de incidencia dieron sus frutos en abril de 2022, cuando el parlamento aprobó un proyecto de ley sobre violencia sexual. La nueva ley penaliza el matrimonio forzado y el abuso sexual y aumenta la protección de las víctimas de violencia física y sexual. La sociedad civil continúa trabajando para garantizar la efectiva implementación de la nueva ley.

Hemos tardado 10 años en llegar hasta aquí. Una victoria como esta confirma la gran influencia que tiene nuestro trabajo en la sociedad. La violencia sexual es un delito que afecta a quienes constituyen la mayoría de nuestra sociedad. La aprobación de esta ley es un paso más en la reivindicación de los derechos de las mujeres y los y las niñas, incluido su derecho a vivir en un entorno seguro.

NURIL QOMARIYAH, [Perempuan Bergerak](#), Indonesia



Al igual que el movimiento feminista, los eventos del Orgullo LGBTQI+ volvieron a salir a la calle allí donde las restricciones de la pandemia lo permitieron. En los lugares donde el movimiento está arraigado, como el Reino Unido y Estados Unidos, las marchas del Orgullo han ido adquiriendo un cariz más radical, ya que el activismo rechaza la cooptación corporativa de los últimos años. Movido por el impulso del movimiento Black Lives Matter, el activismo está conectando sus luchas por derechos con demandas de justicia racial y social, construyendo nuevas alianzas y permitiendo a diversas categorías de excluidos tomar el liderazgo.

VISIBILIDAD, REACCIÓN Y RESISTENCIA

La visibilidad también suscita reacciones violentas. Las políticas tóxicas que buscan dividir para reinar están alimentando e instrumentalizando la hostilidad



hacia las personas LGBTQI+ para movilizar bases de apoyo conservadoras. En Hungría, Orbán denigró a las personas LGBTQI+ como parte de su estrategia de reelección. Pero tanto en Hungría como en Polonia y otros países, las personas LGBTQI+ se niegan valientemente a volver al clóset y trabajan para normalizar su presencia en la vida pública. En otros lugares, como Ghana y otros países africanos donde, por herencia colonial, las relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo criminalizadas, los políticos movilizan con fuerza creciente la homofobia en represalia contra activistas que luchan por sus derechos.

En la India, las mujeres musulmanas se han convertido en blanco de los ataques del primer ministro Narendra Modi y su partido nacionalista hindú, motivados por su intención de consolidar su poder. En vísperas de unas elecciones clave, las mujeres indias musulmanas se encontraron en el fuego cruzado de

sendos ataques contra los derechos de las minorías religiosas y de las mujeres, en el marco de una disputa acerca del uso del hiyab en las escuelas. La hostilidad fue motorizada por la desinformación. Las jóvenes musulmanas se vieron colocadas frente a una opción imposible, puestas a elegir entre el derecho a practicar su religión y el derecho a la educación.

La prohibición del hiyab es parte de la marginación de los musulmanes. Los musulmanes están arrinconados y son el blanco de un gobierno de derecha que los demoniza para aumentar su apoyo y mantenerse en el poder. También es violado el derecho de las mujeres a expresar nuestra propia identidad. Nadie más que yo debería poder decidir si me pongo o no el hiyab.

[SYEDA HAMEED, Foro de Mujeres Musulmanas, India](#)

En ningún lugar se atacan tanto los derechos de las mujeres como en Afganistán tras la toma del poder

por los talibanes en agosto de 2021. En su búsqueda de reconocimiento internacional, el nuevo régimen talibán se presentó como menos represivo que en el pasado; sin embargo, los hechos han traicionado sus palabras. Las mujeres han perdido el acceso a la educación, al trabajo y al ocio. Recientemente se ha introducido el **velo obligatorio**. Como era de esperarse, la violencia de género está creciendo.

Sin embargo, la actual generación post-Taliban, que ha experimentado relativa libertad, no está dispuesta a ceder sin luchar. Pese al severo riesgo de violencia y detención, las restricciones han impulsado la resistencia en lugar de la sumisión, bajo la forma de protestas, pero también de actividades clandestinas, situando a las mujeres y las niñas a la vanguardia de la lucha por los derechos humanos en Afganistán.



Queremos cambiar la mentalidad de la gente y mostrarle que los derechos de niños y niñas, los derechos de las mujeres y el derecho a la educación son derechos fundamentales. En 2016 empezamos con 12 escuelas secretas. Ahora tenemos 33 escuelas secretas en las provincias más pobres de Afganistán. Ahora mismo, 5.000 niñas estudian cada día en nuestras escuelas secretas.

[MATIULLAH WESA](#), [PenPath](#), Afganistán

Puede que los talibanes sean los peores, pero están lejos de ser los únicos fundamentalistas empeñados en someter a la sociedad a las normas religiosas. En el país que los talibanes consideran su enemigo acérrimo, Estados Unidos, el fundamentalismo está en pleno apogeo. El trumpismo sigue en ascenso, aunque Trump ya no esté en el poder. La Corte Suprema de Estados Unidos está a punto de revertir *Roe vs. Wade*, la sentencia de 1973 que protege el derecho al aborto. Esto conllevará la inmediata entrada en vi-



gor de leyes estatales que prohíben el aborto en aproximadamente la mitad del país. Es probable que a esto le sigan esfuerzos para imponer una prohibición a nivel nacional.

A nivel estatal se está produciendo una contienda regresiva en la que los estados compiten por ser reconocidos como el más “pro-vida”. Por ahora Oklahoma va ganando esta deplorable competencia, ya que ha **prohibido el aborto** a partir del momento de la “fertilización”, una política basada en la desinformación intencionada sobre la concepción y el embarazo. La cosa no va a quedar ahí: es probable que, envalentada, la extrema derecha **vaya por** la anticoncepción, el matrimonio igualitario e incluso la desegregación racial, sobre la base de la refutación de la interpretación constitucional en que se basan estas libertades básicas que se filtró de la Corte Suprema.

Las defensoras de los derechos de las mujeres no se resignan a ser espectadoras de estos acontecimientos: se están **movilizando** en todo el país para hacer sentir su presencia en las calles, al tiempo que se organizan solidariamente para garantizar la continuidad de alguna forma de acceso al aborto.

Los políticos extremistas llevan décadas empeñándose en estigmatizar y prohibir el aborto. Pero nosotras seguiremos luchando sin pausa por el acceso irrestricto al aborto para todas las personas. El aborto es una prestación básica de salud, y debe ser fácilmente accesible para cualquier persona que lo necesite o lo desee. Lideramos este movimiento para cambiar la cultura desde una perspectiva abiertamente a favor del aborto, a través de la construcción de vínculos comunitarios, educación e incidencia política.

[CAROLINE DUBLE](#), [Avow](#), Estados Unidos

La guerra cultural también se está librando en el terreno de la educación. Se están retirando libros de las bibliotecas, a lo que los estudiantes están resistiendo mediante a la formación de “clubes de libros prohibidos” y reclamando por su derecho a leer. Las prohibiciones avanzan estado por estado, apuntando contra profesores que mencionan la sexualidad o el género en clase o que enseñan la “teoría crítica de la raza”, un concepto académico que tiene décadas de antigüedad y que examina las intersecciones entre raza, sociedad e instituciones, pero que está siendo tergiversado de la misma manera que lo ha sido el concepto de “género”, con la intención de atacarlo. El **proyecto de ley de los Derechos de los Padres en la Educación** del estado de Florida es probablemente la encarnación más fuerte de las aspiraciones de un movimiento neoconservador antigénero fuertemente financiado por fundaciones estadounidenses.

El mismo dinero estadounidense se destina activamente a la financiación del extremismo en todo el mundo. Gracias a él, grupos antiderechos con cuantiosos recursos logran extender su influencia. Recientemente, este tipo de fuerzas ha actuado en Guatemala, donde el Congreso presentó una ley para aumentar las penas de prisión por aborto, prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo y restringir la enseñanza de la diversidad sexual. En respuesta a las protestas, el presidente dio marcha atrás y el Congreso retiró el proyecto de ley; sin embargo, quedó en evidencia que los grupos antiderechos están presionando, tanteando el terreno y trabajando en un proyecto a largo plazo. La sociedad civil no puede bajar la guardia.

Los grupos antiderechos de Guatemala forman parte de un movimiento transnacional altamente organizado y bien financiado que tiene por objetivo socavar los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+, así como la participación más amplia de la sociedad civil en el debate y las decisiones públicas.

[VISIBLES](#), Guatemala

AVANCES DEL DERECHO AL ABORTO

Aunque el contexto global es difícil, una sociedad civil muy comprometida y organizada ha ganado terreno en varios países, sobre todo en América Latina, donde el cambio generacional ha convertido el feminismo en un movimiento de masas, bajo la bandera de la marea verde.

Las buenas noticias llegaron primero de Ecuador, donde en abril de 2021 la Corte Constitucional falló en un caso presentado por grupos defensores de los derechos de las mujeres despenalizando el aborto en casos de violación. Se trató del primer relajamiento de las severas leyes ecuatorianas contra el aborto. Aunque el movimiento de mujeres consideró que había sido demasiado poco y llegado demasiado tarde, se preparó inmediatamente para la batalla legislativa para convertir la sentencia en realidad. El reconocimiento de que esta pequeña victoria podría abrir la puerta a logros mayores se reflejó en la reacción fundamentalista que sobrevino enseguida.

Para quienes hemos dejado la vida en esto y la seguiremos dejando, este cambio tiene un gran impacto simbólico a pesar de ser un pequeño paso. Obviamente, la legalización del aborto en casos de violación es algo enorme para las niñas violadas. Y si bien no se

ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de todas las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos en cualquier circunstancia, simbólicamente es un progreso enorme porque desmitifica el aborto.

[VIRGINIA GÓMEZ DE LA TORRE](#), [Fundación Desafío](#), Ecuador

En El Salvador la esperanza provino del sistema regional de derechos humanos: en noviembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia en un caso presentado por organizaciones salvadoreñas de derechos de las mujeres. La sentencia determinó que la prohibición absoluta del aborto y la criminalización de las mujeres que sufren emergencias obstétricas constituyen graves violaciones de los derechos humanos. En una decisión de amplio alcance, ya que es vinculante para los 20 países que han aceptado su jurisdicción, la Corte ordenó al gobierno que reparara el daño y modificara sus leyes y políticas.

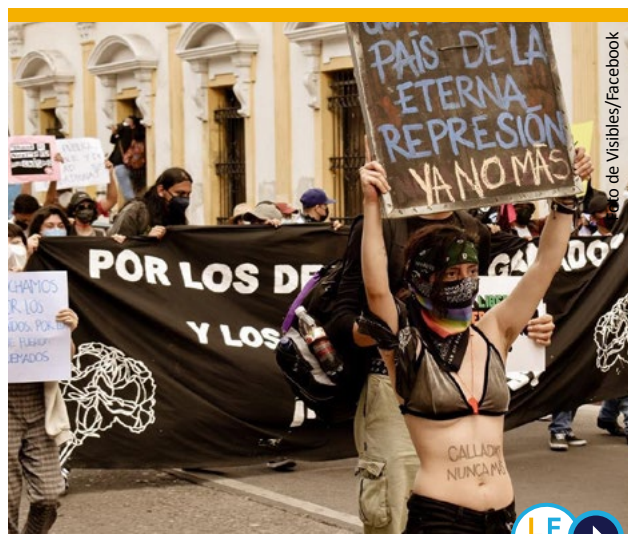


Foto de Visibles/Facebook

Guatemala: el movimiento antiderechos muestra los dientes



Foto de Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images

Ecuador: un paso pequeño pero decisivo en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos



Foto de Roque Alvarado/AP Photo/GRAFIA/Getty Images

El Salvador: sistema regional de derechos humanos refrenda victoria de la sociedad civil



El litigio estratégico en el sistema interamericano nos ha permitido abordar la problemática de la persecución, la tortura y el abuso judicial y policial que enfrentan las mujeres en El Salvador. La justicia en El Salvador es una justicia patriarcal.

[SARA GARCÍA GROSS, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador](#)

El litigio también dio sus frutos en Colombia, bajo la forma de una sentencia de la Corte Constitucional que en febrero de 2022 despenalizó el aborto a petición hasta la semana 24. Esta decisión tan esperada fue el resultado de una lucha de décadas del movimiento feminista, pero también desató una inmediata reacción antiderechos que incluyó iniciativas para restablecer las leyes restrictivas.

A diferencia de Estados Unidos, México sin duda se ha sumado a la ola verde: su Corte Suprema tomó varias

decisiones cruciales que podrían allanar el camino hacia la legalización del aborto en todo el país. En una sentencia clave en un caso que involucra al estado de Sinaloa, declaró inconstitucional que las leyes estatales redefinan el concepto legal de persona para proteger la “vida humana desde la concepción”. Poco después, también declaró inválido el principio de objeción de conciencia para el personal médico. Estos pasos reafirmaron la esperanza de que el continente americano en su conjunto se mueva en una dirección progresista: aunque acapare los titulares, Estados Unidos representa cada vez más la excepción más que la regla.

En nuestro país persiste un fuerte estigma en torno al aborto, basado en la idea de que la maternidad es el destino obligado de las mujeres. Esta idea continúa permeando a todas las instituciones del Estado y sus leyes, y constituye la base para la criminalización no solo social sino también legal del aborto. Además, envía

el fuerte mensaje de que el Estado desempeña un rol en decisiones reproductivas que deberían pertenecer a la esfera privada.

[VERÓNICA ESPARZA y REBECA LOREA, Grupo de Información en Reproducción Elegida, México](#)

Al otro lado del océano, en la pequeña San Marino, el progreso llegó a través de las urnas: en un referéndum celebrado en septiembre de 2021 la ciudadanía decidió por abrumadora mayoría anular la prohibición total del aborto. El resultado desmintió la imagen socialmente conservadora del país y fue el producto de una campaña positiva y amplia a favor del cambio que contrastó con la campaña negativa de los grupos religiosos que se oponían a la reforma. El resultado animó a las activistas de otros países muy católicos, como Polonia, donde el aborto ha sido recientemente **prohibido**, y Malta, donde siempre ha sido ilegal.



Enfrentamos la oposición de la Iglesia católica y del partido en el poder, la Democracia Cristiana. El hecho de que el 77% de la ciudadanía, en gran medida compuesta de católicos y votantes del partido en el poder, haya votado “sí”, demuestra que las opiniones de la gente han evolucionado más rápido que las de sus representantes políticos y religiosos.

SARA CASADEI, [Noi Ci Siamo San Marino](#)

LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTQI+

Las mismas fuerzas que intentan frenar la ola de liberalización del derecho al aborto también están atacando a las personas LGBTQI+, y en particular a **las personas trans**, causando sufrimientos inmensos. No obstante, la lucha para hacer realidad los derechos de las personas LGBTQI+ continúa avanzando.

En Centroamérica y el Caribe, territorio durante mucho tiempo inhóspito para las personas LGBTQI+, se han conseguido avances, como con el derecho al aborto, en el sistema regional de derechos humanos, como resultado de casos presentados por la sociedad civil. En febrero de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe sobre un caso presentado por dos personas LGBTQI+ contra el Estado de Jamaica. El Estado fue declarado responsable de la violación de sus derechos fundamentales e instado a derogar sus leyes homófobas.

Esta decisión sin precedentes -la primera en que el organismo regional declara que las leyes que criminalizan a las personas LGBTQI+ violan el derecho internacional- trajo consigo esperanzas de progreso en el Caribe de la Commonwealth, donde nueve países

todavía tienen leyes coloniales que prohíben las relaciones entre personas del mismo sexo.

Para la sociedad civil, el informe reforzó los llamamientos en curso a enmendar la Ley de Delitos contra la Persona de 1864 y pasó a formar parte de la incidencia legislativa para lograr el cambio legal. Tras 20 años de labor de incidencia, hoy se habla públicamente de los derechos de las personas LGBTQI+ y se observa un aumento de la tolerancia pública y una creciente voluntad entre representantes parlamentarios, líderes políticos y tomadores de decisiones de interactuar con la comunidad LGBTQI+ local.

KAREN LLOYD, [J-FLAG](#), Jamaica

En Honduras, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado por el asesinato de Vicky Hernández, una mujer trans, trayendo esperanzas de que los abusos generalizados que su-

fren diariamente las personas trans y la impunidad casi total que ha prevalecido puedan llegar a su fin.

La sentencia marca un antes y un después, ya que establece garantías de no repetición que deben transformarse en políticas públicas a favor de las personas LGBTQI+.

INDYRA MENDOZA, [Red Lésbica Cattrachas](#), Honduras

En Chile, un país en cambio acelerado que actualmente protagoniza un proceso de una inclusividad sin precedentes para redactar su nueva constitución -véase más arriba-, en diciembre de 2021 se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario. Se necesitaron años de campaña para llegar a este punto. El activismo pasó por todos los tribunales nacionales hasta llegar a la Corte Suprema y luego denunció al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras lo cual llegó a un “acuerdo amistoso” con el Es-



Jamaica: un paso más hacia la justicia para las personas LGBTQI+



Honduras: un atisbo de justicia para la comunidad LGBTQI+



tado. Fue este acuerdo el que finalmente condujo a la aprobación del proyecto de ley elaborado por la sociedad civil.

Chile está viviendo un proceso complejo, de cambio de época, como resultado del estallido social de 2019. Aunque el movimiento por la igualdad de género ya era muy fuerte, el contexto de movilización social generó un ambiente propicio para la consolidación de un actor político LGBTQI+ reconocible en las calles y en las manifestaciones ciudadanas por más igualdad.

MARCO BECERRA, [AcciónGay](#), Chile

En Suiza, el Parlamento aprobó una ley similar en diciembre de 2020, también tras años de campaña. Los grupos antiderechos, sin embargo, se negaron a aceptarla y convocaron un referéndum en un intento de movilizar la reacción de la ciudadanía. Pero la amplia campaña por el sí se encargó de que la tentativa fracasara:

en septiembre de 2021, el 64% de los votantes dieron su apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo, garantizando el derecho por voluntad popular.

El reconocimiento del derecho al matrimonio para todas las parejas eliminará las desigualdades de trato legal que aún existen en cuanto a la naturalización, la adopción conjunta, la propiedad conjunta, el acceso a la reproducción asistida y el reconocimiento legal de las relaciones entre padres e hijos.

RETO WYSS, [Cruz Rosa](#), Suiza

LA INJUSTICIA RACIAL EN LA AGENDA

Las múltiples voces que insisten en que las vidas de las personas negras importan no se han callado. Se han dado algunos pasos importantes para hacer frente a los legados coloniales que integran los emblemas

del racismo en la vida cotidiana; sin embargo, el movimiento ha inspirado violentas reacciones. Montada en la desinformación, la pandemia desató una ola intensa de agresiones racistas contra minorías asiáticas en los países occidentales. En respuesta, grupos de personas de origen asiático se han aliado con el movimiento global, exigiendo que las vidas asiáticas también importen.

Muchos de nosotros nos inspiramos en el movimiento Black Lives Matter en 2020 y, desde entonces, hemos visto cómo cada vez más personas hablan de antirracismo y de la necesidad de ser activamente antirracistas, y participan en las luchas por la justicia social en términos amplios. Hemos visto a muchas personas salir a las calles y tomar medidas para ser activamente antirracistas en sus vidas cotidianas.

MARITA ETCUBAÑEZ, [Asian Americans Advancing Justice](#), Estados Unidos



Foto de Claudio Santana/Getty Images

Chile: vientos de cambio para los derechos LGBTQI+



Suiza: desafío antiderechos superado con los colores del arco iris



Foto de Eze Amos/Getty Images

Haciendo olas: la lucha global por la justicia racial sigue su curso



Los pueblos indígenas de Canadá también están desafiando largas historias de discriminación. En 2021 salieron a la luz pruebas innegables de la existencia de fosas comunes de niños indígenas, que hasta 1997 eran obligados a ingresar en un sistema racista de internados donde muchos morían como consecuencia de negligencias y abusos institucionalizados. Los indígenas canadienses convirtieron su dolor en protesta, abriendo un nuevo debate sobre el genocidio fundacional del país. Pero más allá de las ceremonias oficiales de arrepentimiento, exigen acciones materiales para acabar con la exclusión en que siguen viviendo los indígenas canadienses.

Los desafíos son enormes. Las fuerzas de extrema derecha están movilizándolo el odio, y los delitos de odio racial **están aumentando** en los países del norte global. La llamada “teoría del gran reemplazo”,



un conjunto de mentiras malintencionadas, dejó de ser privativa de grupos marginales de supremacistas blancos y ha ingresado en el mainstream político. Integra tanto el manifiesto de tiradores masivos en los Estados Unidos como los programas de políticos de derecha cada vez más integrados en el mainstream, lo cual la convierte en una poderosa pieza de desinformación que la sociedad civil debe encontrar la forma de refutar.

MIGRACIÓN Y PERSONAS REFUGIADAS: UN SISTEMA QUEBRADO

Incluso en medio de una pandemia que limitó los movimientos, el número de personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares alcanzó **un nuevo récord** en 2021: según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 84 millones de personas fueron desplazadas, eclipsando las cifras de 2020 y 2019, que en su momento habían batido récords. Y esto fue antes de que por lo menos **6.6 millones de ucranianos** huyeran de la guerra. El nuestro es, como nunca antes, un mundo de personas migrantes y refugiadas, aunque las políticas nacionales y globales se nieguen a aceptarlo.

El conflicto sigue siendo uno de los principales motores del desplazamiento en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Etiopía y Sudán, entre otros países. En Afganistán, el empeoramiento de las condiciones de seguridad obligó a mucha gente a abandonar sus hogares ante el avance del talibán. Se están registrando niveles de desplazamiento sin precedentes en

Centroamérica, Haití, México y Venezuela, donde la gente abandona sus hogares, y a menudo sus países, debido a la violencia, la falta de empleo, los estragos de la pandemia y los efectos del cambio climático. El Mediterráneo sigue siendo la única ruta posible, pero también una fosa común, para muchas personas que intentan alcanzar un refugio seguro en Europa, a menudo huyendo del trato inhumano en Libia.

Las restricciones no detienen las migraciones, y en cambio profundizan las vulneraciones de derechos de las personas migrantes, pues las hace susceptibles a las inclemencias del mercado de trabajo o del mercado de alquiler de vivienda y les limita el acceso a derechos básicos como salud y educación.

[DELIO CUBIDES, Instituto Católico Chileno de Migración](#)



A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil, los Estados rara vez muestran algo más que hostilidad hacia las personas migrantes. Países que dieron acogida a solicitantes de asilo sirios, como Dinamarca, ahora han decidido -contra toda evidencia- que pueden devolverlos a su país. Si se les envía a casa, cabe esperar que enfrenten represión. En Turquía, el país con la mayor población de personas refugiadas del mundo, el presidente Recep Tayyip Erdoğan atiza repetidamente la xenofobia contra las personas migrantes y refugiadas, instrumentalizándolas para conseguir apoyo político en las elecciones y obtener concesiones de la Unión Europea.

Con todas las demás rutas bloqueadas por políticos obsesionados con detener el flujo migratorio, mu-

chas personas intentan una peligrosa travesía marítima para llegar al Reino Unido. A principios de 2022, en una movida evidentemente destinada a aplacar su base de derecha y distraerla de los numerosos escándalos, el gobierno del Reino Unido anunció un plan para trasladar solicitantes de asilo a Ruanda. **Las personas de nacionalidad siria** serían las primeras. A cambio, el autoritario presidente de Ruanda, Paul Kagame, esperará no recibir más críticas del Reino Unido por su situación de derechos humanos.

El Reino Unido no fue el primer Estado en tomar estas medidas: Australia lleva años internando solicitantes de asilo en centros de detención en islas del Pacífico. Esto es lo que ocurre cuando los políticos convierten a las personas solicitantes de asilo en chivos expiato-

rios de problemas políticos mayores y niegan la condición humana de quienes cruzan las fronteras.

Pero la catástrofe de Ucrania demostró que las personas migrantes no tienen por qué ser tratadas así. Las personas ucranianas que huían de la guerra merecían toda la ayuda posible; sin embargo, el trato que recibieron puso de manifiesto el racismo profundamente arraigado que subyace a la hostilidad que se suele dispensar a las personas migrantes y refugiadas. La cobertura de los medios de comunicación del éxodo ucraniano fue sorprendentemente diferente a la cobertura de la llegada de personas refugiadas no europeas. Mientras tanto, las y los estudiantes africanos y asiáticos y **las personas gitanas** que escapaban de Ucrania recibieron un trato nota-



blemente peor. Los líderes derechistas de Hungría y Polonia, que durante años se beneficiaron políticamente de la animosidad hacia migrantes y refugiados de Oriente Medio, ahora buscaban extraer ventajas políticas de la buena acogida dispensada a refugiados blancos.

Sin embargo, esa compasión tiene sus límites: en Polonia, el Estado cada vez más ha intentado absorber los esfuerzos voluntarios, ya que sospecha de la sociedad civil, y a las refugiadas que quedaron em-

barazadas como resultado de una violación se les **niega ayuda** como consecuencia de la draconiana legislación antiaborto del país.

Los obstáculos no detienen a las personas migrantes y refugiadas: sólo empeoran sus vidas y las exponen al peligro y la delincuencia. Las soluciones sólo podrán surgir de enfoques regionales y globales concertados que reconozcan a la migración como un dato de la realidad y una cuestión de derechos humanos más que un problema de seguridad.



Refugiados ucranianos: ¿prevalecerá la compasión sobre los prejuicios?





MEDIO AMBIENTE: ACCIÓN Y NEGACIÓN

Un mundo que se recalienta es un mundo inherentemente injusto. Los grupos excluidos, por ser los más privados de poder y recursos, son los más vulnerables a los impactos del cambio climático. Quienes menos han contribuido al cambio climático serán quienes sufran sus peores consecuencias. La sociedad civil está impulsando la acción climática y una transición justa por las mismas razones por las que reclama libertades democráticas y justicia económica, social, de género y racial. La sociedad civil está desafiando el modelo económico extractivista que antepone los beneficios a las personas y exige que gobiernos y empresas rindan cuentas por la perpetuación de la crisis climática.

LA INACCIÓN DE GOBIERNOS Y EMPRESAS

La advertencia no podría ser más dura. El **último informe** del IPCC, publicado en abril de 2022, deja claro que ya casi no tenemos tiempo. Las emisiones

de gases de efecto invernadero, que hasta ahora no han hecho más que aumentar, deben empezar a disminuir antes de 2025 para que tengamos alguna posibilidad de limitar el aumento de la temperatura mundial a un máximo de 1,5°C por encima de la época preindustrial. Por encima de este umbral, los impactos del cambio climático serán mucho peores.

No se trata de una opinión marginal: el informe fue firmado por todos los Estados miembros de la ONU y respaldado por cientos de científicos. El secretario general de la ONU, António Guterres, fue contundente al respaldar sus conclusiones. **Denunció** la “letanía de promesas climáticas incumplidas” y las “promesas huecas” de gobiernos y empresas, acusándolos de mentir con resultados “catastróficos”.

Y, sin embargo, las devastadoras conclusiones y la necesidad de acción urgente apenas aparecieron en las portadas antes de quedar relegadas en el ciclo de las noticias. Con la atención del mundo en otra parte, in-

cluida la invasión rusa de Ucrania, la industria de los combustibles fósiles **sigue adelante**, apostando por que los compromisos de los gobiernos no lleven a ninguna acción que acabe con su negocio letal. Solamente en la semana posterior a la publicación del informe del IPCC se aprobaron **siete** nuevos proyectos de petróleo y gas. En 2022, numerosas empresas de combustibles fósiles han registrado beneficios récord.

En muchos países golpeados por la pandemia, los gobiernos están impulsando enormes proyectos energéticos y de infraestructura con la esperanza de reactivar sus economías. Las subvenciones que apoyan a las industrias dañinas para el medio ambiente han ascendido al **2%** del PIB mundial. La guerra de Rusia contra Ucrania, que debería incentivar a los Estados que dependen de la energía rusa a reducir su dependencia adoptando energías renovables, podría en cambio estar impulsando la vuelta al carbón o la adopción de alternativas no sostenibles como el fracking.

Recientemente, el gobierno actual levantó una moratoria a la minería, basándose en el argumento de que ayudaría a la recuperación de la economía, después de que ésta se viera duramente afectada por la mala respuesta a la pandemia. Esto habilitará unos 100 acuerdos mineros en diferentes partes del país. Muchas comunidades se opusieron a esta medida debido a los impactos negativos que tienen los proyectos mineros actualmente en funcionamiento.

[LIA MAI TORRES](#), [Centro de Asuntos Ambientales, Filipinas](#)

Pero para la sociedad civil, la desesperación no es una opción. La sociedad civil está manteniendo la presión por todos los medios posibles, desde el cabildo, la acción legal y el trabajo con los accionistas de las empresas, hasta la participación en foros globales y la protesta callejera masiva, la agitación y la desobediencia civil no violenta. La enormidad del desafío exige acción simultánea en todos los frentes.

INCIDENCIA EN FOROS GLOBALES: OTRA COP DECEPCIONANTE

A nivel intergubernamental, el paso del tiempo en materia climática se mide en COP o conferencias de las partes. Cada año -excepto en 2020, a causa de la pandemia- los Estados se reúnen, con una fuerte presencia del sector privado, para asumir compromisos climáticos y comprobar los avances en su cumplimiento. Desde el Acuerdo de París de 2015, en el que casi todos los Estados acordaron un plan para limitar el calentamiento global, las COP revisan los resultados de su implementación. La sociedad civil se esfuerza por participar, pero a menudo se ve frustrada por la falta de acceso.

Es evidente que hay que cuestionar el valor de estas cumbres: ya se han celebrado 26 y, sin embargo, el peligro de catástrofe climática ha aumentado. La COP26, celebrada en Glasgow, Reino Unido, en noviembre de 2021, no resultó en ningún avance, ya que brindó mucho espectáculo pero poca sustancia. Al margen de la conferencia, Estados y empresas lanzaron una serie de acuerdos paralelos no vinculantes que ocuparon los titulares, pero que a menudo se disolvieron en los detalles. Los Estados más infractores optaron por no participar en muchos de los acuerdos, algunos de los cuales fueron poco más que un lavado de cara verde.

En el acuerdo oficial final, la atenuación de última hora de los compromisos para acabar con el uso del carbón dejó en evidencia la persistente influencia de la industria de los combustibles fósiles, representada por **más de 500 delegados**. Los planes de reducción de emisiones no se acercaron al objetivo de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5°C. Los compromisos de financiación de soluciones climáticas para los países del sur global siguieron siendo insuficientes.

Los resultados reflejaron el hecho de que las voces de la sociedad civil fueron constantemente silenciadas: a muchas personas se les negó el acceso a las sesiones clave o se les indicó que utilizaran plataformas de internet que no funcionaban bien. En estas circunstancias se hizo casi imposible incidir por una mayor ambición y presionar por la rendición de cuentas.

Una vez más, en la COP26 los Estados han demostrado una total ineficiencia para actuar en cumplimiento de sus propias determinaciones. Se está invirtiendo mucho más dinero en destruir el planeta que

en salvarlo. Mientras en estos espacios no se discutan sanciones para los Estados que no cumplan acuerdos, o que no firman siquiera las declaraciones, no habrá resultados concretos.

[RUTH ALIPAZ CUQUI](#), [Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas, Bolivia](#)

El compromiso de la COP26 de desarrollar planes nacionales más sólidos para la COP27 trajo cierta esperanza, pero hay un problema importante: sólo se conseguirán mejores planes y acciones si la sociedad civil es capaz de exigir mayor ambición. Pero la COP27 se celebrará en Egipto, un país con espacio cívico cerrado, donde los problemas de acceso de la sociedad civil no pueden sino aumentar. Después de Egipto será el turno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), que también tiene espacio cívico cerrado. El



espacio cívico es esencial para la acción por el clima, porque permite a la sociedad civil impulsar una transición justa, reclamar compromisos más firmes y monitorear la actuación de los Estados y el sector privado. El espacio cívico cerrado permite a gobiernos y empresas sustraerse a la presión y el escrutinio. Cuando la ONU celebra cumbres climáticas clave en condiciones de espacio cívico cerrado, hace que sea menos probable una acción climática adecuada.

Los insuficientes resultados de la COP26, y la probabilidad de una decepción mayor en la COP27, son una invitación abierta para que la sociedad civil ejerza mayor presión callejera sobre los procesos institucionales.

INCIDENCIA EN FAVOR DE NORMAS AMBIENTALES MÁS ESTRUCTURADAS

A nivel global, la sociedad civil también está presionando para que se establezcan normas más estrictas de protección del medio ambiente.

En julio de 2021 se alcanzó un hito con la publicación del primer borrador oficial de un nuevo Marco Mundial de la Biodiversidad en el marco de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB). Este documento establece una serie de objetivos de conservación de la tierra y el mar. Es importante destacar que se compromete a eliminar los incentivos financieros que perjudican a la biodiversidad y a aumentar la financiación internacional para la conservación en los países del sur global.

La elaboración de este marco ha llevado dos años, durante los cuales la sociedad civil ha desempeñado

un papel importante a través de la Alianza de la CDB, una red que trabaja para aumentar la concientización de la ciudadanía y conectar a quienes trabajan en la arena global con quienes desarrollan labores relacionadas con la biodiversidad sobre el terreno.

La CDB es un acuerdo jurídicamente vinculante y, si se implementa plenamente, tiene un gran potencial. Es una oportunidad para adoptar un enfoque basado en los derechos que sitúe en el centro del debate a los derechos de los pueblos indígenas y tribales, las mujeres y los campesinos, así como a los derechos de la naturaleza, conectando a la CDB con el andamiaje internacional de los derechos humanos.

[GADIR LAVADENZ, Alianza de la CDB](#)

El marco está pendiente de finalización en la próxima Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad, pospuesta en repetidas ocasiones a causa de la pandemia. La sociedad civil seguirá trabajando para tratar de mantener el impulso y permanecerá alerta ante posibles intentos de diluir el acuerdo.

Otros procesos internacionales en curso presentan oportunidades de influencia para la sociedad civil. Actualmente se está **negociando** el Tratado Global de la ONU sobre los Océanos, que podría ofrecer una protección significativamente más alta para la mayor parte de la superficie del planeta. Sin embargo, la cuarta ronda de negociaciones, celebrada en marzo de 2022, terminó en desacuerdos. Según relatos de la sociedad civil, algunos Estados prolongaron deliberadamente las discusiones para evitar decisiones que cuestionaran sus formas de operar y les obligaran a rendir cuentas. Al igual que con el Marco Mundial de

la Biodiversidad, la sociedad civil ha advertido que cuanto más se alarguen las discusiones, más diluido resultará el acuerdo.

Una oportunidad más incipiente ha surgido de la propuesta de elaborar el **primer tratado internacional contra la contaminación por plásticos**, destinado a reducir progresivamente la producción de nuevos plásticos para 2040. La idea, presentada por algunos Estados en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en febrero de 2021, cuenta con el apoyo de muchos científicos y grupos de la sociedad civil. Los avances en todos estos frentes dependerán en parte de la presión que ejerza la sociedad civil para empujar a los gobiernos a mostrar voluntad política.

A nivel regional, la primera reunión de la conferencia de las partes del **Acuerdo de Escazú**, el tratado de derechos ambientales para América Latina y el Caribe, tuvo lugar en Chile en abril de 2022. Los debates se centraron en gran medida en las normas que deben seguir los Estados para establecer mecanismos de monitoreo independientes.

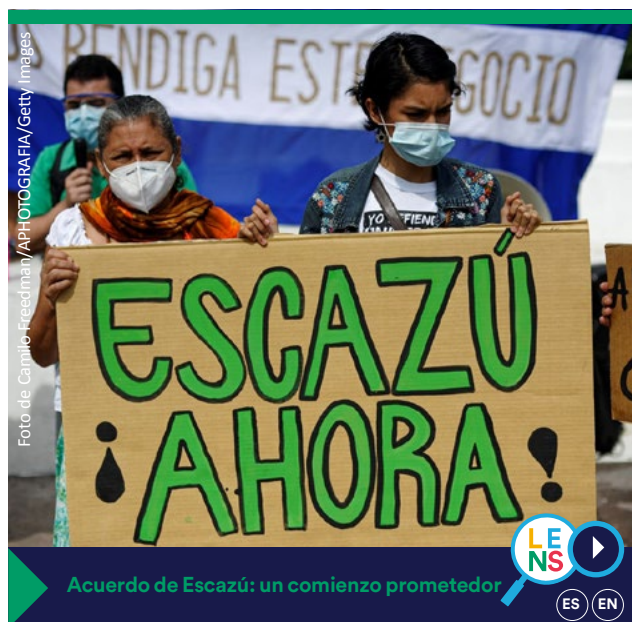
El tratado, el primero que incluye disposiciones sobre personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente, se negoció con una amplia participación de la sociedad civil, y entró en vigor tras su decimoprimer ratificación en febrero de 2021. Las ratificaciones a nivel nacional fueron el resultado de la **incidencia y las campañas sostenidas de la sociedad civil**. Este rol le fue reconocido en una cumbre mucho más abierta a la participación de la sociedad civil de lo que suelen ser estos procesos. La sociedad civil seguirá presionando para que muchos más

Estados ratifiquen el tratado y examinará la adherencia de los Estados a sus principios de derechos humanos.

La primera COP fue muy importante en términos políticos, ya que renovó el compromiso político con el Acuerdo de Escazú. Políticamente se vio mucho compromiso. Las reglas adoptadas son muy positivas para la participación de activa de la sociedad civil. Incluso en esta COP, tuvimos una gran participación de sociedad civil, grupos de mujeres, grupos de jóvenes, de pueblos indígenas. La sociedad civil tuvo voz directa en las negociaciones para llevar sus propuestas.

NATALIA GÓMEZ, [EarthRights International](#)

La sociedad civil siguió trabajando para incorporar las normas internacionales a la legislación nacional. Un avance se produjo en Italia, donde una ley aprobada en febrero de 2022 incorporó la protección del me-



Acuerdo de Escazú: un comienzo prometedor

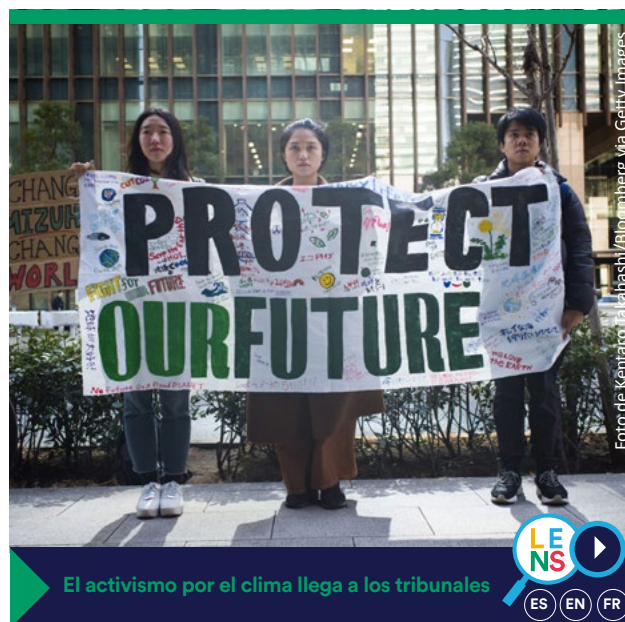
dio ambiente a la constitución. Los activistas del clima celebraron las nuevas posibilidades que se abren con esta medida.

El nuevo texto del artículo 9 establece el principio de protección del medio ambiente “en interés de las generaciones futuras”, una referencia al concepto de desarrollo sostenible, según el cual los recursos naturales no pueden explotarse de forma ilimitada, sin tener en cuenta que son finitos y que esto afectará a quienes vengan después de nosotros.

EDOARDO ZANCHINI, [Legambiente Onlus](#), Italia

LITIGIOS AMBIENTALES

Una parte de la respuesta del activismo que adquiere cada vez mayor importancia consiste en el recur-



El activismo por el clima llega a los tribunales

so a los tribunales para exigir rendición de cuentas a gobiernos y empresas: desde 2015 se han presentado **más de mil** demandas relativas al clima, y otras 191 se presentaron entre mayo de 2020 y mayo de 2021. Las investigaciones sugieren que más de la mitad ha tenido éxito.

Los activistas del clima ganaron varios casos históricos en 2021, cuando los tribunales fallaron contra gobiernos y empresas y les ordenaron actuar contra el cambio climático.

En los Países Bajos, un tribunal dictaminó que el gigante petrolero Shell debe reducir sus emisiones en un 45% para 2030, sentando precedente al ordenar a una corporación privada que cumpla con el Acuerdo de París, y que lo haga no solamente en lo que concierne a sus propias emisiones sino en toda su cadena de valor. El caso fue presentado por grupos ecologistas liderados por la red Amigos de la Tierra.

En Alemania, nueve jóvenes activistas del clima ganaron un caso en abril de 2021: el tribunal dictaminó que era la ley alemana debía ser reforzada para reducir las emisiones a cero neto hacia 2050. El tribunal reconoció que se estaban vulnerando los derechos de la juventud, ya que de no realizarse los recortes adecuados en el presente, se le impondría una carga inaceptable en el futuro.

Animado por la sentencia y tras una ola de indignación pública por las devastadoras inundaciones, el joven movimiento climático alemán se movilizó durante la campaña electoral de octubre de 2021 para exigir mayor ambición a todos los partidos. El nuevo gobierno de coa-

lición, que incluye al pujante Partido Verde, fue más allá de la sentencia del tribunal, **comprometiéndose** a eliminar el carbón para 2030 y a generar el 80% de la energía a partir de fuentes renovables para la misma fecha.

El movimiento por el clima, y en particular el de Viernes por el Futuro, se ha fortalecido mucho. La juventud está movilizada y mantendrá la presión por que teme, y con razón, por su futuro.

SASCHA MÜLLER-KRAENNER, [Acción Medioambiental Alemania](#)

Una dinámica similar entre el litigio y la acción política se produjo en Australia, donde en julio de 2021 jóvenes activistas obtuvieron una sentencia judicial que dictaminó que el gobierno tiene el deber de cuidar a la juventud australiana para evitar causarles lesiones o la muerte como consecuencia de las emisio-



nes de dióxido de carbono. Aunque la sentencia está sujeta a apelación, el cambio climático ha quedado convertido en un tema importante ante las elecciones de mayo de 2022 -ver arriba-, en las que candidatos comprometidos a revertir la política de inacción climática del gobierno obtuvieron buenos resultados y el partido gobernante, que niega la realidad del cambio climático, sufrió una de sus peores derrotas.

En Estados Unidos se están presentando muchas demandas; un grupo de jóvenes activistas de Montana pronto tendrá su oportunidad en los tribunales, en un caso que **argumenta**, como en Alemania, que el gobierno ha puesto los intereses de la industria de los combustibles fósiles por encima de su futuro.

Algunos Estados especialmente vulnerables al cambio climático están siguiendo este ejemplo. En 2021, Vanuatu **anunció** que solicitaría una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia sobre el derecho de las generaciones presentes y futuras a ser protegidas del cambio climático. Su iniciativa ha **obtenido el apoyo** de más de 1.500 grupos de la sociedad civil de más de 130 países.

ACCIONISTAS EN ACCIÓN

A las empresas de combustibles fósiles también les están reclamando que hagan una transición a energías más limpias tanto inversores preocupados como activistas climáticos que, al comprar unas pocas acciones, pueden presentar una resolución a los accionistas.

En mayo de 2021, un fondo de cobertura activista

consiguió dos puestos en el consejo de administración de Exxon, argumentando que el gigante petrolero no estaba adaptando su estrategia empresarial al cambio climático. Ese mismo mes, en contra del consejo de administración, la mayoría de los accionistas de Chevron **votó** a favor de reducir las emisiones generadas por los productos de la empresa. En abril de 2022, los accionistas del gigante minero Río Tinto **votaron en contra** de la aprobación de los estados financieros de la empresa debido a la falta de claridad sobre los riesgos del cambio climático.

Se está convirtiendo en algo casi rutinario que las empresas, sobre todo muchas empresas grandes con sede en Estados Unidos, deban enfrentar resoluciones sobre el clima. No todas son empresas de combustibles fósiles: en enero de 2022, el 70% de los accionistas de Costco **votó** para exigir a la empresa que estableciera una estrategia para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero en su cadena de valor hacia 2050.

Las campañas que piden que los fondos de pensiones desinvieran y apoyen energías renovables están teniendo éxito. En octubre de 2021, uno de los mayores fondos de pensiones del mundo, el holandés ABP, anunció que **vendería** todas sus participaciones en empresas de combustibles fósiles, valuadas en unos 17.000 millones de dólares. Esto ocurrió tras acciones legales y **protestas** que incluyeron la ocupación de sus oficinas.

El mes anterior, bajo una presión similar por parte del activismo por el clima, el segundo fondo de pensiones de Canadá, CDPQ, **anunció** que se desprendería de todas sus inversiones en petróleo para fines de 2022.

Cada vez más, el activismo del clima está haciendo campaña para conseguir asientos en los consejos de administración de empresas de combustibles fósiles; incluso cuando no lo consiguen, utilizan sus campañas para llamar la atención sobre el daño climático que causan estas empresas.

LA RESISTENCIA EN EL TERRENO

Las personas defensoras del medio ambiente, del derecho a la tierra y de los derechos humanos de los pueblos indígenas están haciendo frente al daño climático sobre el terreno. A menudo esto supone un gran riesgo, especialmente en América Latina, la región con la **mayor concentración** de asesinatos de activistas ambientales de todo el mundo. Los ataques suelen estar relacionados con las industrias extractivas, especialmente con las empresas mineras.

Pero dada la importancia de lo que está en juego, continúa la lucha por el cambio a pesar de los riesgos. En su defensa de la tierra y el territorio, la sociedad civil de base sigue oponiendo resistencia a las restricciones del espacio cívico. En Honduras, uno de los países más peligrosos del mundo para el activismo ambiental, una campaña sostenida dio como resultado la reivindicación de las luchas de los defensores del agua de Guapinol, que pasaron más de dos años y medio en prisión por su activismo contra la minería antes de ser liberados en febrero de 2022.

Hemos trabajado para defender y acompañar a los compañeros y compañeras criminalizadas por el Estado y las empresas, pero nunca logramos que se

atendiera el origen del conflicto: la entrega de los recursos naturales. Impedir la criminalización de defensores es un gran paso, pero debemos abordar el tema de las concesiones. Los proyectos aprobados están esperando ser implementados.

[EDY TÁBORA, Justicia para los Pueblos, Honduras](#)

En Bougainville, región autónoma de Papúa Nueva Guinea, una campaña sostenida y una denuncia presentada ante el gobierno australiano dieron resultado en julio de 2021, cuando Río Tinto aceptó financiar una evaluación independiente sobre el impacto medioambiental y de derechos humanos de una enorme mina de cobre y oro que había abandonado en 1989.

Las comunidades con las que trabajamos pidieron a Río Tinto que financiara la evaluación de impacto como primer paso fundamental para abordar



Un rayo de esperanza en Bougainville

los enormes y continuos problemas ambientales y de derechos humanos que está causando la mina. Esperan que, una vez finalizada la evaluación de impacto, Río Tinto contribuya con un fondo sustancial, gestionado de forma independiente, para ayudar a abordar los daños causados por la mina y contribuir a los esfuerzos de rehabilitación a largo plazo.

[KEREN ADAMS, Centro Jurídico de Derechos Humanos, Australia](#)

Río Tinto también experimentó un retroceso en Serbia, donde en enero de 2022 el gobierno **retiró** las licencias de extracción de litio y boro en el valle de Jadar. El gobierno de Serbia había apostado por el extractivismo: en 2015 aprobó una ley que declaraba a la extracción mineral de interés estratégico nacional. Pero las protestas masivas, que incluyeron **bloqueos de carreteras**, junto con las acciones legales lo obligaron a cambiar de rumbo.

Frente al panorama de mucha gente descontenta movilizada en un año electoral, el gobierno reaccionó. Revocó el decreto que daba luz verde al proyecto de Río Tinto y dio marcha atrás en el plan de ordenación del territorio destinado a la ejecución del proyecto, que había sido introducido ilegalmente. El hecho de que la gente se movilizara en un año electoral hizo toda la diferencia.

[MIROSLAV MIJATOVIĆ, Equipo Anticorrupción Podrinje, Serbia](#)

No solamente en Serbia se observan resistencias frente al pujante negocio de la extracción de litio, que actualmente está en auge debido a la creciente demanda de baterías para vehículos eléctricos, pero que es imposible de extraer sin provocar grandes daños en los emplazamientos mineros. En Bolivia, las comuni-

dades protestan en las minas contra la potencial extracción financiada con capital extranjero, mientras que en Chile las comunidades indígenas **reclaman** la suspensión de los permisos de explotación hasta que se acuerde un plan con estándares ambientales. El activismo ha presentado un **recurso de amparo** que la Corte Suprema ha accedido a conocer.

En Estados Unidos, la saga del oleoducto Keystone XL tuvo un **final feliz**. Tras una década de resistencia por parte de grupos indígenas y activistas ambientales, en enero de 2021 el presidente Joe Biden canceló el permiso de Estados Unidos para el oleoducto diseñado para transportar petróleo desde las arenas bituminosas de Alberta, en Canadá. Los promotores del proyecto lo **abandonaron** oficialmente en junio siguiente. Pronto la atención pasó a enfocarse en otros proyectos de oleoductos, tales como el Trans Mountain, pro-



riedad del gobierno canadiense, y otros oleoductos estadounidenses que aún tienen autorización.

La resistencia continúa en África Oriental, donde los gobiernos de Tanzania y Uganda se han embarcado en un gran proyecto extractivo que incluye dos nuevos yacimientos de petróleo y un oleoducto que atraviesa los dos países. Poderosos intereses estatales y empresariales intentan acallar las voces locales que advierten de sus posibles consecuencias desastrosas, pero la campaña #StopEACOP se está movilizando para presionar a los inversores, intentando detener el financiamiento para el desarrollo del proyecto.

«A nuestro gobierno sólo le importan los beneficios, no las personas. Le hemos instado a que tenga cuidado con la aprobación que da a los inversores, pero recibimos siempre amenazas a modo de respuesta.

[NYOMBI MORRIS, Earth Volunteers, Uganda](#)



Lo que estas diversas campañas dejan claro es que los compromisos de reducción de emisiones son apenas una parte de lo que se necesita. Los modelos económicos actuales no son sostenibles y deben cambiar. Los incentivos económicos apoyan la extracción en lugar de la acción climática, y el simple hecho de cambiar un tipo de automóvil por otro no eliminará los daños de la extracción. Deben desarrollarse y diseminarse las opciones energéticas menos dañinas, pero también deben hacerse esfuerzos por conservar energía, ayudando a la sociedad a vivir dentro de los límites del planeta. Las estrategias para reducir las emisiones y convivir con los impactos climáticos deben financiarse adecuadamente y no se debe colocar sobre las poblaciones del sur global una carga aún más pesada de la que ya soportan.

LA RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE CATÁSTROFE

Un catastrófico derrame de petróleo ocurrido en la costa peruana en enero de 2022 puso de manifiesto otro impacto devastador de la industria de los combustibles fósiles. Una fuga masiva de un oleoducto que daba servicio a una refinería propiedad del gigante petrolero español Repsol despojó de sus medios de vida a miles de pescadores artesanales, convirtió sitios turísticos en pueblos fantasma y provocó grandes daños a la flora y fauna marina.

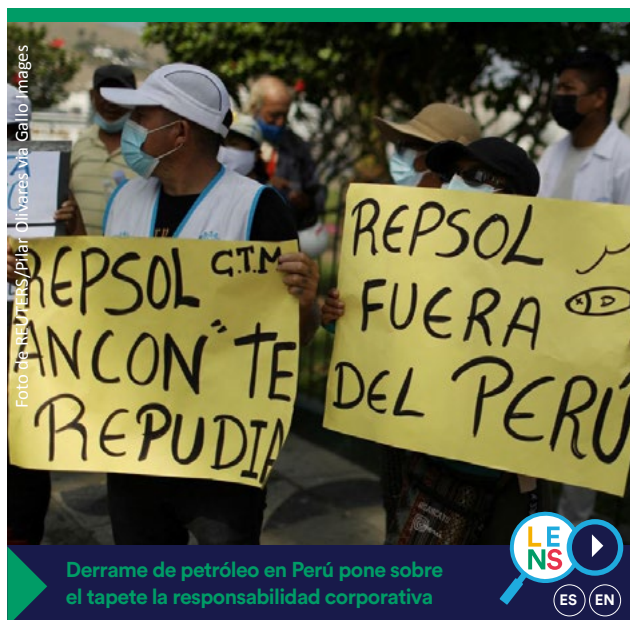
Frente a una empresa petrolera con un largo **historial** de irresponsabilidad y tácticas de “lavado verde” y un Estado que promueve un modelo extractivista y no implementa seriamente sus propias leyes medioam-

bientales, la sociedad civil exige rendición de cuentas y mejores estándares de seguridad.

La reacción de la empresa fue muy lenta. Hay poca transparencia en la investigación. La falta de rendición de cuentas es un reclamo de larga data de las comunidades de estas zonas, pero ha sido sistemáticamente ignorado. Para nosotros es muy claro: Repsol debe asumir públicamente responsabilidades claramente definidas.

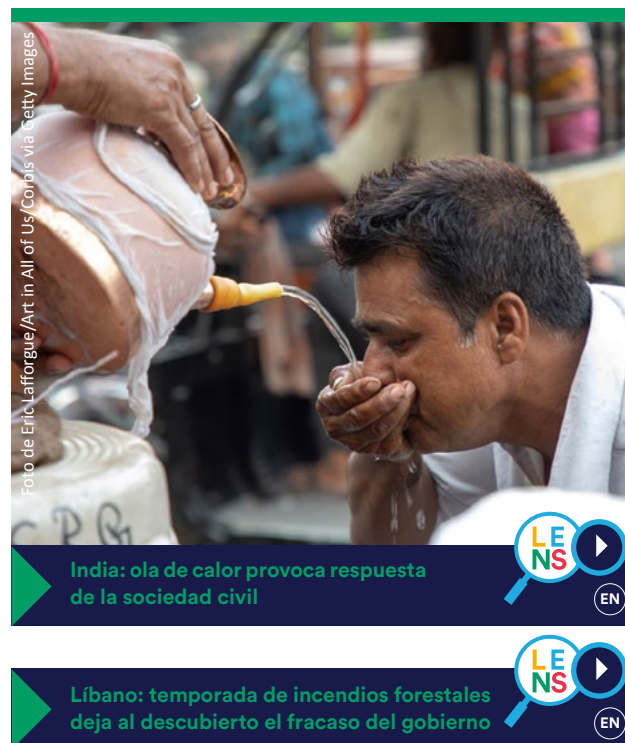
[JUAN CARLOS SUEIRO, Oceana](#)

La historia se repitió en abril de 2022 en **Gabón**, donde se produjo un escape en una terminal petrolera gestionada por la compañía petrolera franco-británica Perenco. La empresa, que ya había sido acusada de numerosas violaciones de la normativa ambiental, insistió en que el escape estaba controlado. Pero el activismo ambiental denunció un importante derrame y



reclamó que la empresa asumiera su responsabilidad.

Mientras tanto, continúan sucediéndose fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático. En los últimos meses, olas de calor sin precedentes han causado la muerte de cientos de personas en **Canadá**, India y **Estados Unidos**, entre otros países. La sequía extrema amenaza la selva amazónica en **Brasil** y ha contribuido a alimentar el conflicto en **Somalia**. Los incendios forestales han hecho estragos en el Líbano, **Rusia** y Turquía, entre muchos otros casos. Las inundaciones, cada vez **más frecuentes**, han afectado a países europeos como Austria, **Bélgica** y Alemania y, más recientemente, a Sudáfrica, causando pérdidas de vidas y destrucción de **infraestructura** crucial.



Las personas que menos tienen, es decir, las que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, son las que están pagando el precio más alto pese a no haber contribuido al cambio climático. La sociedad civil se ha esforzado por ayudar a quienes han sufrido traumas, perdido sus hogares o padecido problemas de salud a causa de incendios forestales, inundaciones y olas de calor.

La prestación de estos apoyos se combina con la labor de incidencia de la sociedad civil, que no ha cesado de instar a los gobiernos a tomar medidas más enérgicas contra el cambio climático. Además de responder a sus efectos devastadores, deben abordarse las causas profundas de los fenómenos climáticos extremos.





GOBERNANZA GLOBAL: FALLAS AL DESCUBIERTO

Las emergencias ponen a prueba el sistema de gobernanza mundial, que sigue mostrando sus fallas. La invasión rusa de Ucrania ha puesto de manifiesto una vez más las profundas deficiencias de la arquitectura mundial destinada a garantizar los derechos y mantener la seguridad de las personas, como ya lo había hecho la pandemia de COVID-19. La necesidad de una mejor cooperación global, facilitada por la reforma de la ONU, nunca ha sido tan grande.

UN CONSEJO DE SEGURIDAD NO APTO PARA ALCANZAR SUS FINES

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) pudo hacer poco en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, a pesar de que ésta constituyó una clara y evidente violación de la Carta de la ONU, que prohíbe a los Estados usar la fuerza contra la “integridad territorial o la independencia política” de otro Estado.

En tanto que uno de los cinco miembros permanentes del CSNU, Rusia simplemente ejerció su poder de veto. Su desprecio por la ONU fue explícito: **lanzó** su invasión en medio de una sesión especial del CSNU, socavándolo intencionadamente. Utilizó las sesiones del CSNU para **difundir desinformación**, incluida la absurda afirmación de que Ucrania tiene armas biológicas y químicas, y presentó una **resolución** de mala fe sobre acción humanitaria al mismo tiempo que bloqueaba el acceso de ayuda humanitaria a Ucrania. Rusia ha cooptado al máximo órgano global destinado a promover la paz para librar una guerra de propaganda que complementa su guerra terrestre.

La arquitectura del sistema de gobernanza internacional no funciona correctamente porque tiene un defecto de diseño fundamental. Rusia es miembro permanente del CSNU. El mandato de este órgano es mantener la paz y la seguridad internacionales, pero hemos visto que en Ucrania ha ocurrido todo lo contrario. Y también hay una falta de comprensión de sus res-

ponsabilidades por parte de quienes están en posiciones desde donde podrían ayudar. Cuando comenzó la guerra, las organizaciones internacionales evacuaron a su personal de Kiev y de otros lugares atacados. Está claro que las organizaciones internacionales no están a la altura de su responsabilidad histórica.

[OLEKSANDRA MATVIICHUK](#), [Centro de Libertades Civiles](#), Ucrania

Durante años la sociedad civil ha alertado sobre este problema. El poder de veto ha obstaculizado al CSNU una y otra vez, dejándolo al margen de los principales conflictos en la medida en que sus acciones fueron vetadas por Estados con intereses en esos conflictos. Ahora funciona apenas como un teatro político, un espacio para la puesta en escena de gestos grandilocuentes.

Ante el bloqueo de los procesos del CSNU se convocó una rara sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU). El 2 de marzo la Asamblea aprobó una **resolución** que condenaba la agresión

rusa en los términos más enérgicos y exigía la retirada inmediata e incondicional de Rusia. El 24 de marzo aprobó una segunda **resolución** que exigía el cese de los combates y el respeto de los corredores humanitarios. Aunque las resoluciones de la Asamblea ofrecieron a muchos Estados la oportunidad de expresar su indignación, a diferencia de las del CSNU, no son vinculantes.

En ambas votaciones de la AGNU hubo ausencias preocupantes en la lista de Estados que condenaron el ataque de Putin contra el derecho internacional y los derechos humanos. La votación puso en evidencia las relaciones existentes de complicidad, patrocinio y temor. Mientras que solamente los aliados más incondicionales de Rusia, como Cuba y Corea del Norte, y sus Estados vasallos, como Bielorrusia y Siria, se atrevieron a apoyarla, muchos otros se



abstuvieron. Optaron por mantener una posición de aparente neutralidad, a pesar de que Rusia había quebrado las normas internacionales fundamentales en que se basa la ONU y evidentemente está cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad. Así, los Estados antepusieron su interés propio a su deber de defender la Carta de la ONU.

EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: ¿UN REFUGIO PARA VIOLADORES DE DERECHOS?

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), el máximo órgano mundial de derechos humanos, presenta un panorama desigual. En abril, más de dos tercios de los Estados miembros de la ONU votaron a favor de **suspender** la pertenencia de Rusia al CDH, evitando al mundo el siniestro espectáculo de Rusia utilizando este espacio para negar o justificar sus graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, una vez más, la votación no fue unánime: 58 Estados se abstuvieron y 24 votaron en contra.

Todos los que votaron a favor de Rusia tienen un pobre o pésimo historial de derechos humanos y un espacio cívico sensiblemente peor que los que apoyaron la resolución. Un espacio cívico deficiente protege a los líderes políticos de la presión pública y del escrutinio de sus decisiones. La represión nacional facilita la represión en el ámbito internacional.

Rusia nunca debería haber accedido al CDH. La sociedad civil lleva mucho tiempo señalando una anomalía en el corazón del sistema de derechos humanos de la

ONU: se supone que los miembros del CDH deben “defender las normas más estrictas en materia de protección y promoción de los derechos humanos”, pero al menos 34 de sus 47 miembros actuales, incluida Rusia, claramente no lo hacen, como lo atestiguan sus calificaciones en el **CIVICUS Monitor**, que indican graves restricciones del espacio cívico. Incluso tras la suspensión de Rusia, el Consejo continúa dominado por Estados que violan los derechos humanos. Es difícil evitar la conclusión de que los Estados buscan asientos en el CDH para socavar y no para contribuir al establecimiento de normas internacionales de derechos humanos y controlar su cumplimiento.

El hecho de que las elecciones para el CDH no sean competitivas contribuye a ello: cada grupo regional de Estados tiene asignado un número de asientos, y es habitual que las negociaciones previas garanticen que se presenten solamente tantos candidatos como puestos haya disponibles. De ahí que la sociedad civil exija elecciones competitivas en tanto que condición mínima para permitir un mayor escrutinio del historial de derechos humanos de los Estados que presenten sus candidaturas al Consejo.

Como resultado de la presión ejercida por la sociedad civil, en marzo de 2022 el CDH dio un paso positivo al votar por abrumadora mayoría la **creación** de una comisión de investigación de los crímenes de guerra y otros abusos de derechos humanos en Ucrania. Es importante que la comisión cuente con los recursos adecuados y con la posibilidad de realizar su trabajo y de colaborar con la sociedad civil ucraniana, que está recogiendo pruebas de las violaciones, para lograr que los responsables rindan cuentas.

ESTADOS REPRESIVOS Y ORGANISMOS INTERGUBERNAMENTALES: EL CASO DE INTERPOL

Más allá de los órganos de la ONU, se observa una tendencia más amplia de muchos Estados a ignorar las normas internacionales, no solamente para iniciar conflictos sino también para ejercer **represión transnacional** contra sus **disidentes** exiliados, y a tratar de influir sobre las instituciones internacionales mediante la financiación selectiva, la captura de altos cargos y el ejercicio de presiones indebidas sobre las decisiones de voto de otros Estados.

Una de las instituciones en que estas tendencias han confluído recientemente es una organización internacional con la que la sociedad civil rara vez se relaciona: el organismo de cooperación policial internacional, Interpol. En los últimos años ha quedado de manifiesto que el sistema de notificaciones rojas de Interpol, es decir, de alertas compartidas a través de sus redes de comunicación que solicitan la extradición de ciudadanos extranjeros por delitos graves, está siendo **utilizado de forma abusiva** por Estados represivos para conseguir la devolución de disidentes que han huido de la represión.

Bielorrusia, China, Rusia y Turquía son los que más utilizan esta táctica de represión transfronteriza. Cuando Interpol celebró su asamblea general en Turquía en noviembre de 2021, el ministro del Interior de ese país **dejó claro** que su gobierno planeaba utilizar el evento para persuadir a delegados y funcionarios de que intensificaran sus esfuerzos para detener y extraditar disidentes turcos exiliados. Ahora que Siria se ha re-

incorporado al sistema tras su suspensión, no sería de extrañar una persecución similar de los numerosos exiliados que se enfrentaron a su régimen asesino.

En esa misma reunión en Turquía, Interpol eligió un nuevo presidente. Tras intensas presiones, el general Ahmed Naser Al-Raisi, de los EAU, triunfó en una votación secreta. Al-Raisi obtuvo el cargo a pesar de enfrentar varias **demandas** que alegan de forma creíble que fue responsable de torturas en su función de jefe de policía de los EAU.

La campaña de la sociedad civil en su contra no pudo impedir su triunfo: gracias a un proceso de selección poco transparente y sin acceso directo para la sociedad civil, los representantes de los Estados quedaron aislados de eventuales presiones. Dados los crecientes temores de que esté sirviendo de instrumento a los



Estados para silenciar el disenso, Interpol debería dar el paso vital de abrirse al escrutinio de la sociedad civil.

LIMITACIONES DE ACCESO PARA LA SOCIEDAD CIVIL

La sociedad civil hace todo lo posible por participar en los espacios disponibles en instituciones y procesos internacionales, pero la pauta es inconsistente en el mejor de los casos. En la ONU, los Estados suelen retrasar los informes y la acreditación de organizaciones de la sociedad civil con argumentos poco convincentes. Cada institución ofrece un nivel variado de espacio a la sociedad civil. Los espacios disponibles tienden a privilegiar a la élite de la sociedad civil. Y en todos los casos la sociedad civil se queja de tener un nivel de acceso muy por debajo no solamente del de los Estados sino también del sector privado.

No se trata de una cuestión trivial. Cuando excluyen a la sociedad civil, las instituciones de la ONU corren el riesgo de quedar desconectadas de quienes están más cerca de los principales problemas que la ONU debe abordar.

Eso fue lo que ocurrió con la cumbre climática COP26 de noviembre de 2021 -véase más arriba-, en la que a la sociedad civil le fue negado el acceso a sesiones clave y se la relegó al final de la cola, detrás del sector privado, incluidas las empresas de combustibles fósiles. Esto redujo su capacidad de ejercer presión para lograr acuerdos ambiciosos y forzar a los Estados a rendir cuentas de su aplicación.

En la inauguración oficial de la AGNU de octubre de 2021, se permitió la asistencia de las delegaciones gubernamentales y de los medios de comunicación, pero no de la sociedad civil. Lo mismo ocurrió en la reunión anual de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), el máximo encuentro mundial sobre derechos de las mujeres. La CSW de marzo de 2022 se celebró en un “formato híbrido”, en virtud del cual los representantes de los Estados estuvieron presentes en la sede de la ONU mientras la mayoría de los representantes de la sociedad civil participaron de forma virtual. Incluso a los representantes de la sociedad civil que pudieron asistir en persona no se les permitió entrar en la sesión donde se negociaron los resultados de la reunión. Aunque los participantes trataron de aprovechar al máximo su

participación en línea, el hecho de que la mayoría no estuviera físicamente presente los privó de un medio clave para influir en los resultados a través de sus conexiones personales con los delegados.

La CSW de 2022 tuvo la oportunidad de mejorar sus procesos, ya que estuvieron en debate sus formas de trabajo. Sin embargo, las resistencias conservadoras impidieron la introducción de cambios para permitir la participación de la sociedad civil en la negociación de los documentos finales. A las organizaciones de la sociedad civil (OSC) ni siquiera se les concedió el estatus de observadoras. En el futuro inmediato, la sociedad civil en la CSW seguirá intentando hacer lo que pueda desde los márgenes.

En la CSW, las OSC siguieron excluidas de la sala de negociación. La sociedad civil del sur global enfrenta muchas restricciones estructurales para participar, tales como limitaciones de tiempo y barreras lingüísticas. Realmente queríamos que la CSW66 facilitara la participación significativa y democrática de las mujeres, sobre todo porque este año se negociaba una resolución sobre métodos de trabajo. Sin embargo, fue un nuevo fracaso. Para nosotras, fue una muestra más de lo desconectada que está la elaboración de políticas a nivel mundial de las realidades de las mujeres.

[WANUN PERMPIBUL](#), [Climate Watch Tailandia](#) y [MISUN WOO](#), [Foro de Asia-Pacífico sobre Mujeres, Derecho y Desarrollo](#)

PREPARACIÓN PARA LA PRÓXIMA PANDEMIA

La pandemia de COVID-19 puso en evidencia otro fracaso de la cooperación internacional. Más de seis millones de personas han muerto. Se podrían haber salvado muchas vidas con una respuesta internacional más rápida y mejor coordinada a un virus que no respetaba las fronteras. Pero, en cambio, los Estados poderosos siguieron políticas de autointerés nacional y los Estados del sur global recibieron escasos apoyos, mientras las instituciones internacionales se mantenían en gran medida al margen.

Ante la inevitabilidad de nuevas pandemias, la sociedad civil reclama que se aprendan rápidamente las lecciones, las cuales incluyen una necesidad evidente



de nuevos mecanismos globales que incentiven a los Estados a cooperar y rendir cuentas.

Como resultado de la labor de incidencia de la sociedad civil, se está redactando un tratado mundial sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias. Para que el tratado establezca altos estándares es necesario que la sociedad civil pueda participar desde el comienzo, tanto en el desarrollo del tratado como en el seguimiento de su aplicación, ejerciendo presión para que se cumpla y exigiendo rendición de cuentas.

En cuanto a la participación en el propio proceso del tratado, la OMS tiene una categoría para la sociedad civil, que es la de “observadores oficiales”. Pero la sociedad civil debería tener mucha más influencia en el debate. Un problema importante que he visto es la gestión centralizada de la pandemia. Tenemos que involucrar a las comunidades, y esto incluye a la sociedad civil. Cuando se gestiona una pandemia, hay que incorporar la participación de personas y organizaciones a nivel local.

[BARBARA STOCKING, Panel para una Convención Mundial de Salud Pública](#)

LA REFORMA DE LA ONU: UNA NECESIDAD URGENTE

Nunca ha sido más evidente la necesidad de un orden internacional basado en normas ante el cual los Estados tengan que rendir cuentas por sus violaciones de derechos humanos. El sistema actual es deficiente. La ONU se ha vuelto burocrática y lenta, a menudo reacciona ante las crisis en lugar de intervenir para prevenirlas, y es acusada por quienes pa-

decen conflictos atroces en países tan diversos como Afganistán, **Etiopía**, **Myanmar** y **Ucrania** de haberlas abandonado cuando más la necesitaban.

Los llamamientos de la sociedad civil a favor de la reforma de la ONU señalan el camino a seguir. La sociedad civil lleva mucho tiempo trabajando con Estados aliados en el desarrollo de propuestas para superar la disfuncionalidad del CSNU que incluyen el desarrollo de normas para moderar el veto y animar a los Estados a **renunciar** a su poder de veto. Por fin parece que se está avanzando en este sentido, ya que la AGNU adoptó en abril una **resolución** que establece que los Estados que hagan uso de su derecho de veto tendrán que explicar su decisión ante la AGNU, con el objetivo de aumentar, al menos, el costo político del uso del veto.



Pero más allá de las ideas sobre cómo mejorar el funcionamiento de partes específicas de la ONU, es necesario considerar cambios fundamentales que podrían ayudar a la ONU a cumplir los ideales de su **Carta** fundacional, redactada en respuesta a la devastación de la Segunda Guerra Mundial: los de proteger a las personas del flagelo de la guerra, defender los derechos y la dignidad de todas las personas y lograr un mundo donde todos vivan en paz y seguridad, sobre la base de la cooperación multilateral y bajo las leyes internacionales.

Aunque la Carta de la ONU comienza con las palabras “Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas”, la ONU sigue estando construida en torno a los Estados. Pero la sociedad civil está dejando claro que los asuntos de que se ocupa la ONU son demasiado importantes para dejarlos exclusivamente en manos de los Estados. Las limitadas respuesta de la ONU a la agresión de Putin constituye un argumento incontestable a favor del cambio. La mayoría de los Estados han condenado las acciones de Putin, pero luego se han visto obligados a verlo ignorar las normas e intentar manipular los procesos de la ONU. Es necesario que acepten la agenda de reformas de la sociedad civil como parte de la solución.

En 2021 hubo una oportunidad perdida cuando el secretario general de la ONU publicó **Nuestra Agenda Común**, el resultado de un ejercicio de consulta sobre cómo puede responder la ONU a los desafíos actuales y futuros. Aunque su análisis de los problemas mundiales era sólido, a la hora de formular sus recomendaciones el informe careció de la ambición reclamada por la sociedad civil.

La sociedad civil insta a democratizar las instituciones y procesos de la ONU y a abrirlos a una mayor diversidad de voces, y en particular a las de las personas directamente afectadas por los problemas más acuciantes del momento.

Las reformas impulsadas por la sociedad civil incluyen el nombramiento de un **enviado de la sociedad civil** o una **defensoría del pueblo** que defienda a la sociedad civil en el sistema de la ONU; una **iniciativa ciudadana mundial** basada en el modelo de la Unión Europea, que permitiría presentar ante el CSNU o la AGNU las peticiones que reúnan un amplio apoyo público; y una **asamblea parlamentaria de la ONU** para incorporar una mayor variedad de voces a los procesos de la ONU y obligar a los Estados a rendir cuentas.

Sin embargo, a pesar de la amplia participación de la sociedad civil en los procesos de consulta que alimentaron Nuestra Agenda Común, estas ideas en general han sido ignoradas. Incluso la mínima demanda de un enviado de la sociedad civil en la ONU fue apenas reconocida como un punto a considerar en el futuro.

Durante las consultas con las partes interesadas, las OSC de todas las regiones pidieron un representante de alto nivel de la sociedad civil en la ONU para ayudar a aumentar y diversificar la participación y dar asesoramiento en materia de acceso a todos los espacios, desde la sede de la ONU hasta las COP sobre el clima. Esta fue la única propuesta concreta que atrajo un amplio apoyo y, aunque el informe se compromete a explorarla más a fondo, resultó bastante

desconcertante que Guterres no avanzara e hiciera esta designación, que está en sus manos hacer.

[NATALIE SAMARASINGHE, Asociación de las Naciones Unidas del Reino Unido](#)

Todas estas propuestas constituirían pasos bastante modestos para ayudar a la sociedad civil a desempeñar un rol más importante en la ONU e imponer un mayor control democrático sobre sus decisiones. Son los siguientes pasos lógicos en el camino para ayudar a la ONU a ser más receptiva y eficaz. La alternativa a ello es que la ONU se vuelva irrelevante, quedando al margen de un mundo volátil y en permanente transformación.

AGRADECIMIENTOS

El análisis contenido en este informe no habría sido posible sin los aportes y opiniones de activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil de todo el mundo. Agradecemos a las siguientes personas entrevistadas sus contribuciones a la elaboración de este informe:

Lina Abou Habib, “**Líbano: Estas elecciones han traído consigo nuevas voces que hablan de derechos**”, 23.may.2022

Bilkis Abouosba, “**Yemen: Las mujeres están totalmente ausentes de los espacios de toma de decisiones; políticamente no existimos**”, 9.mar.2022

Eucharía Abua, “**CSW66: Los Estados miembros de la ONU deben esforzarse por cumplir internamente sus compromisos**”, 4.abr.2022

Activista anónima colombiana, “**Colombia: La juventud vive un sentimiento de querer cambiarlo todo**”, 25.ago.2021

Activista anónima nicaragüense, “**Nicaragua: Estas elecciones fraudulentas fueron para el gobierno un completo fracaso**”, 18.nov.2021

Keren Adams, “**Papúa Nueva Guinea: La minera debe hacerse cargo de su legado en materia de derechos humanos y medio ambiente**”, 17.sep.2021

Imran Ahmed, “**Desinformación: Los argumentos morales basados en investigaciones técnicamente rigurosas pueden generar cambios**”, 18.oct.2021

Maria Al Abdeh, “**Siria: La pandemia trajo nuevos obstáculos para el ya reducido acceso de las mujeres a los servicios de salud**”, 4.mar.2022

Alyaa Al Ansari, “**Iraq: Hemos presentado muchos proyectos, pero el Parlamento se niega a aprobar una ley contra la violencia de género**”, 7.mar.2022

Ruth Alipaz Cuqui, “**COP26: Se está invirtiendo mucho más dinero en destruir el planeta que en salvarlo**”, 19.nov.2021; “**Bolivia: Para ejercer nuestros derechos, los pueblos indígenas no necesitamos el permiso de nadie**”, 10.feb.2022

Ana Lucía Álvarez, “**Nicaragua: El caso de María Esperanza es parte de un proceso creciente de criminalización de la protesta social**”, 19.feb.2022

Alicia Amarilla, “**Paraguay: Mientras las tierras sigan estando en manos privadas, el conflicto a nivel local va a continuar**”, 5.ene.2022

Ghida Anani, “**Líbano: Los abusos contra las mujeres son el resultado directo de los desequilibrios de género de una sociedad patriarcal**”, 10.mar.2022

Cecilia Ananías Soto, “**Chile: El trabajo doméstico y de cuidados recae abrumadoramente sobre las mujeres**”, 8.mar.2022

Rachid Aouine, “**Argelia: Las autoridades detienen a personas defensoras para asfixiar a la sociedad civil**”, 16.mar.2022

Maddalena Avon, “**Migración: La propagación del COVID-19 no es excusa para tratar a personas vulnerables con mayor violencia**”, 30.sep.2021

Samuel Awom, “**Indonesia: Los activistas independentistas pacíficos pueden ser tratados como terroristas**”, 28.may.2021

Iliana Balabanova, “**Bulgaria: las organizaciones de derechos de las mujeres trabajan juntas por una Europa feminista**”, 2.mar.2022

Luis Barrueto, “**Guatemala: Los grupos antiderechos buscan mantener los privilegios de unos a costa de los derechos de otros**”, 21.mar.2022

Marco Antonio Becerra, “**Chile: Hay un consenso social de que la exclusión arbitraria de las familias diversas es inadmisibles**”, 18.feb.2022

Danny Bediako, “**Ghana: El proyecto de ley ‘antigay’ tendrá consecuencias de largo alcance si no lo combatimos ahora**”, 27.oct.2021

Sudha Bharadwaj, “**India: El gobierno está lidiando con el disenso en formas muy preocupantes**”, 16.feb.2022

Anna Birley, “Reino Unido: La reforma policial es necesaria pero no suficiente para que las mujeres sean respetadas”, 23.feb.2022

Bold Voices, “Reino Unido: La educación puede equipar a la próxima generación para desbaratar la cultura de la violencia de género”, 3.mar.2022

Nixon Boumba, “Haití: La comunidad internacional nunca ha abordado las causas profundas de la crisis”, 26.ene.2022

Yaropolk Brynykh, “Ucrania: Si compartimos información, los dirigentes no podrán hacer la vista gorda ante las violaciones de derechos humanos”, 25.mar.2022

Sara Casadei, “San Marino: Hubo una demanda abrumadora de reconocer a las mujeres el derecho a decidir”, 18.ene.2022

McDonald Chipenza, “Zambia: Las prácticas electorales vistas hasta ahora no arrojan buenas lecciones para la región”, 12.ago.2021

Benedicta Chisom, “Nigeria: El gobierno y el sindicato nos hicieron sentir que nuestra educación no importa”, 16.may.2022

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y Campaña Defender la Libertad, “Colombia: Quienes se manifiestan ponen en riesgo su integridad y su vida”, 23.ago.2021

Delio Cubides, “Chile: Las restricciones migratorias no atacan las causas de la migración”, 15.nov.2021

Agni Das y Aiman Khan, “India: Una sociedad civil efectiva es esencial para promover los derechos humanos”, 9.may.2022

Magdalena Demczak, “Polonia: Si muchas personas realizan pequeñas acciones, podemos conseguir grandes cosas”, 17.mar.2022

Jessica Dercontée, “COP26: Las comunidades marginadas deben estar en el centro de la acción por el clima”, 7.oct.2021

Caroline Duple, “EEUU: Los políticos extremistas llevan décadas empeñándose en estigmatizar y prohibir el aborto”, 6.oct.2021

Teresa Edwards, “Pueblos indígenas: Los canadienses se solidarizan con nosotros y quieren ver un cambio”, 7.oct.2021

Abdel-Rahman El Mahdi, “Sudán: El gobierno y la comunidad internacional deben incluir más a la sociedad civil”, 11.ene.2022

Omar Elmawi, “África Oriental: El proyecto de oleoducto abriría ecosistemas críticos a la explotación comercial del petróleo”, 21.abr.2022

Eduardo Escobar, “El Salvador: El objetivo del presidente es concentrar poder”, 22.sep. 2021

Verónica Esparza y Rebeca Lorea, “México: El debate público y la diversificación de voces son indispensables para ampliar derechos”, 27.sep.2021

Marita Etcubañez, “EEUU: No podemos confiar en que el aumento del odio antiasiático desaparezca una vez terminada la pandemia”, 19.oct.2021

Aziza Fakher, “Túnez: Sólo somos estudiantes que luchan por el futuro en una época en que nuestras opiniones no son tenidas en cuenta”, 31.mar.2022

Ruki Fernando, “Sri Lanka: Las protestas en curso han puesto al gobierno a la defensiva”, 20.abr.2022

Einat Fogel-Levin, “Palestina: La ley antiterrorista se utiliza para restringir el activismo político en Palestina y reducir el espacio cívico en Israel”, 5.ene.2022

Bhavani Fonseca, “Sri Lanka: Mediante la protesta pacífica esperamos proteger nuestra democracia”, 19.abr.2022

Fundación Helsinki para los Derechos Humanos, “Polonia: El derecho al aborto estará inevitablemente en primer plano en el Día Internacional de la Mujer de este año”, 4.mar.2022

Sara García Gross, “El Salvador: La justicia patriarcal persigue, tortura y abusa de las mujeres”, 25.feb.2022

Amine Ghali, “Túnez: La sociedad civil aún no está directamente amenazada, pero creemos que nos llegará el turno”, 20.ene.2022

Allison Gill, “Uzbekistán: La incidencia por los derechos humanos y laborales es una maratón, no una carrera de velocidad”, 29.abr.2022

Virginia Gómez de la Torre, “Los derechos de las mujeres atraviesan una situación de emergencia desde mucho antes de la pandemia”, 23.ago.2021

Alejandro González-Davidson, “Camboya: Este es un caso de manual de crimen organizado con vínculos con el Estado”, 11.nov.2021

Judith Götz, “Austria: Si algo cambió para las mujeres bajo la pandemia, fue para peor”, 3.mar.2022

Sam Grant, “Reino Unido: El gobierno está empeñado en rehuir el escrutinio y la rendición de cuentas”, 26.ago.2021

Daniel Gutierrez Govino, “COP26: Necesitamos regenerarnos a nosotros mismos y a lo que hemos destruido”, 3.nov.2021

Zarin Hainsworth, “Reino Unido: La violencia contra las mujeres continúa en niveles pandémicos”, 12.abr.2022

Syeda Hameed, “India: La prohibición del hiyab es una herramienta más que los políticos de derecha utilizan para permanecer en el poder”, 5.may.2022

Sophie Hansal y Hannah Steiner, “Austria: Desgraciadamente, las épocas de crisis rara vez han sido catalizadoras de la igualdad de género”, 6.mar.2022

Ellie Happel, “Haití: Existe la oportunidad de movernos de la interferencia extranjera al liderazgo real del pueblo haitiano”, 21.dic.2021

Theophile Hategekimana, “COP26: Esperamos que las palabras se traduzcan en compromisos que cambien las conductas”, 23.sep.2021

Hejaaz Hizbullah, “Sri Lanka: Nos arrestan para detener nuestro trabajo, silenciarnos e infundir miedo a los demás”, 30.may.2022

Htoon Htoon Oo, “Malasia: El gobierno debería haber asistido a los refugiados durante la pandemia”, 23.jun.2021

Mubiru Huzaifah, “COP26: Una prioridad clave es abordar la vulnerabilidad a nivel comunitario”, 29.sep.2021

Terry Ince, “CSW66: Las mujeres necesitan más acceso al poder real de decisión política”, 11.abr.2022

Mariela Infante, “Chile: La redacción de la nueva Constitución es una oportunidad histórica para las mujeres”, 15.mar.2022

Marwan Issa, “**Líbano: el movimiento juvenil fue un pilar importante de la oposición a la clase política**”, 25.may.2022

Marie Jahodová, “**República Checa: Creemos que el nuevo gobierno defenderá los principios democráticos**”, 13.ene.2022

Mwape Kapepula y Pamela Mateyo, “**Zambia: Nuestro objetivo es quebrar los sesgos sociales contra las niñas**”, 7.mar.2022

Joseph Kariuki, “**Kenia: El principal elemento disuasorio será que la policía rinda cuentas por los asesinatos en los tribunales**”, 31.ene.2022

Arzak Khan, “**Afganistán: La respuesta internacional ha sido extremadamente débil y vergonzosa**”, 25.oct.2021

Maria Kuznetsova, “**Rusia: Estas protestas son clave para la preservación de la sociedad civil rusa**”, 22.mar.2022

Iván Lanegra, “**Perú: Es necesario recuperar la confianza en las elecciones**”, 18.oct.2021

Antonio Lara, “**México: Las personas defensoras ponen permanentemente en riesgo su libertad y su vida**”, 9.mar.2022

Gadir Lavadenz, “**Biodiversidad: Los gobiernos no mostrarán voluntad política a menos que enfrenten suficiente presión desde abajo**”, 26.oct.2021

Baraka Lenga, “**Tanzania: El gobierno intenta silenciar a quienes se oponen al oleoducto**”, 22.abr.2022

Nay Lin Tun, “**Myanmar: Los militares convirtieron a los trabajadores de la salud de héroes en criminales de la noche a la mañana**”, 6.may.2021

Karen Lloyd, “**Jamaica: Tras 20 años de incidencia, hoy se habla públicamente de los derechos de las personas LGBTQI+**”, 27.ago.2021

Elisa ‘Tita’ Lubi, “**Filipinas: Las acusaciones en mi contra son parte de los esfuerzos del gobierno por silenciar a sus críticos**”, 3.may.2021

Jeeva M, “**India: Hemos logrado una victoria histórica para los derechos laborales de las trabajadoras Dalit**”, 12.may.2022

Natalia Malysheva, “**Rusia: El cierre de medios de comunicación amenaza con crear un vacío informativo**”, 24.mar.2022

Oleksandra Matviichuk, “**Ucrania: Las organizaciones internacionales claramente no están a la altura de sus responsabilidades históricas**”, 29.mar.2022

Manny Maung, “**Myanmar: Casi todas las personas detenidas nos cuentan que han sido golpeadas**”, 6.ago.2021

Helen McEachern, “**CSW66: La incidencia en las políticas públicas requiere tiempo y compromiso a largo plazo**”, 13.abr.2022

Indyra Mendoza, “**Honduras: La sentencia de la Corte Interamericana marca un antes y un después para las personas LGBTQI+**”, 19.ago.2021

Miroslav Mijatović, “**Serbia: No sólo luchamos a nivel local; estamos enviando un mensaje al mundo**”, 14.feb.2022

Nyombi Morris, “**Uganda: A nuestro gobierno solamente le importan las ganancias, no las personas**”, 25.abr.2022

Horia Mosadiq, “**Afganistán: Nuestra lucha por la rendición de cuentas se ha vuelto mil veces más difícil bajo el Talibán**”, 30.abr.2022

Sascha Müller-Kraenner, “**COP26: Sigue faltando conciencia de que necesitamos proteger el clima para protegernos a nosotros mismos**”, 25.oct.2021

Joy Hayley Munthali y Dorothy Kazombo Mwale, “**CSW66: Los defensores ambientales de base están muy poco representados en la toma de decisiones**”, 7.abr.2022

Margaret Mutsamvi, “**Zimbabue: las mujeres jóvenes deben estar en el centro del debate sobre los problemas que les afectan**”, 2.mar.2022

Farrah Naz, “**Pakistán: Como resultado de las normas patriarcales, las mujeres experimentan discriminación en todos los niveles**”, 6.mar.2022

Nyang’ori Ohenjo, “**COP26: Debemos empoderar a las comunidades y a las mujeres en la gestión de los recursos climáticos**”, 14.oct.2021

Adeyeye Olorunfemi, “**Nigeria: El gobierno está más dispuesto a negociar con terroristas que con maestros en huelga**”, 13.may.2022

Caroline Owashaba, “**COP26: En respuesta a la presión desde abajo, deben responder con acciones justas por el clima**”, 20.sep.2021

Boris Patentreger, “**COP26: Los tomadores de decisiones tienen objetivos nacionales pero los problemas son transnacionales**”, 1.nov.2021

Wanun Permpibul y Misun Woo, “**CSW66: La elaboración de políticas a nivel mundial está desconectada de las realidades de las mujeres**”, 8.abr.2022

Sotiris Petropoulos, “**Grecia: Juntos podemos más**”, 23.mar.2022

Nymia Pimentel-Simbulan, “**Filipinas: Nos aseguraremos de que los derechos humanos estén en la agenda electoral**”, 24.feb.2022

Plataforma Alto a los Femicidios, “**Turquía: Seguimos organizándonos y manifestándonos para que no se deje de escuchar ninguna voz**”, 8.mar.2022

Alberto Precht, “**Chile: Por primera vez los extremos están dentro del parlamento y hay voces antidemocráticas inaceptables**”, 17.dic.2021

Nurul Qomariyah, “**Indonesia: El proyecto de ley sobre violencia sexual es un paso más en la consagración de los derechos de mujeres y niños**”, 19.may.2022

Nelya Rakhimova, “**Rusia: Cualquier táctica que utilicen los manifestantes probablemente será prohibida y codificada como delito**”, 18.mar.2022

Antonella Regular y Joaquín Salinas, “**COP26: La juventud está presentando propuestas, no se limita a exigir cambios sosteniendo un cartel**”, 20.oct.2021

Edwin Rekosh, “**Innovación: Las estructuras y prácticas usuales de derechos humanos ya no son óptimas ni suficientes**”, 15.sep.2021

Feliciano Reyna, “**Venezuela: Necesitamos de la comunidad internacional un enfoque multilateral, flexible, y creativo**”, 20.dic.2021

Sasha Romantsova, “**Ucrania: La presencia de las organizaciones internacionales es clave para garantizar la seguridad de los corredores humanitarios**”, 28.mar.2022

Natalie Samarasinghe, “Naciones Unidas: La sociedad civil siempre ha sido parte integral del ecosistema de la ONU”, 19.nov.2021

Denis Shedow, “Rusia: Esperamos que las empresas de redes sociales eviten convertirse en una herramienta de censura”, 19.ene.2022

Charlotte Slente, “Dinamarca: Se protegen las fronteras en lugar de los derechos de las personas”, 22.dic.2021

Krzysztof Śmiszek, “Polonia: La reacción de derecha es apenas una cara de la moneda; la otra es la movilización de la sociedad civil por los derechos”, 25.nov.2021

Zakia Soman, “India: Las chicas musulmana están siendo forzadas a elegir entre la educación y el hiyab”, 11.may.2022

Lorena Sosa, “COP26: El norte global debe rendir cuentas y comprometerse con la lucha contra el cambio climático”, 2.nov.2021

Barbara Stocking, “Tratado pandémico: Los Estados deben compartir la responsabilidad y rendirse cuentas recíprocamente”, 18.may.2022

Kristina Stockwood, “EAU: Muchos líderes se llaman a silencio frente a los abusos sistemáticos de los derechos humanos”, 22.mar.2022

Juan Carlos Sueiro, “Perú: Las regulaciones ambientales se flexibilizaron, cuando se deberían haber reforzado”, 11.feb.2022

Edy Tábora, “Honduras: Debemos atacar el origen del problema: la entrega de los recursos naturales”, 10.may.2022

Mitzi Jonelle Tan, “COP26: Mi esperanza reside en que la gente se una para exigir justicia”, 13.oct.2021

Estefanía Terán, “Ecuador: La sociedad civil debe poner en evidencia el valor agregado de su participación”, 29.oct.2021

Lia Mai Torres, “COP26: Se esgrimen falsas soluciones para desviar nuestra atención de los responsables”, 22.oct.2021

Maria Sarungi Tsehaj, “Tanzania: Lo que se necesita es una nueva constitución que refleje la voluntad del pueblo”, 9.sep.2021

Farid Tukhbatullin, “Turkmenistán: No hay nada parecido a una auténtica sociedad civil, ni hay condiciones para que emerja”, 10.mar.2022

Marinel Ubaldo, “Filipinas: Tememos que desaparezca la democracia por la que tanto lucharon quienes nos precedieron”, 20.may.2022

Charles Wanguhu, “COP26: Esperamos obligaciones más estrictas bajo el principio de responsabilidad común pero diferenciada”, 15.oct.2021

Matiullah Wesa, “Afganistán: La educación es un derecho básico, un derecho islámico y un derecho humano”, 5.abr.2022

Kyaw Win, “Myanmar: Si no tomamos las medidas adecuadas, la Junta cometerá más crímenes”, 1.mar.2022

Reto Wyss, “Suiza: Ya era hora de que todos tuvieran los mismos derechos, sin discriminación”, 17.nov.2021

Edoardo Zanchini, “Italia: La Constitución ahora contempla los intereses de las generaciones futuras”, 14.abr.2022

Yevgeniy Zhovtis, “Kazajistán: Ninguna reforma económica o social supondrá un cambio real sin una reforma política seria”, 3.feb.2022

Jessica Zuber, “Suiza: La victoria del matrimonio igualitario propulsará nuestros esfuerzos para dar los próximos pasos”, 16.nov.2021



Todas las citas utilizadas en este informe son extractos editados de entrevistas con activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil. Para ver las entrevistas completas, visite el [repositorio de entrevistas](#) de CIVICUS Lens.



Conéctese con nosotros

 civicus.org

 info@civicus.org

 [/CIVICUS](https://www.facebook.com/CIVICUS)

 [@CIVICUSespanol](https://twitter.com/CIVICUSespanol)

OFICINA CENTRAL
25 OWL STREET, 6TO PISO
JOHANNESBURGO, 2092
SUDÁFRICA
TEL: +27 (0)11 833 5959
FAX: +27 (0)11 833 7997

CENTRO ONU: NUEVA YORK
205 EAST 42ND STREET, PISO 17
NUEVA YORK, NY, 10017
ESTADOS UNIDOS

CENTRO ONU: GINEBRA
11 AVENUE DE LA PAIX
GINEBRA, CH-1202
SUIZA
TEL: +41 (0)22 733 3435